

Crisis capitalista y perspectivas del neoliberalismo

autoritario en Colombia: ¿Se deshace el *virtuosismo*

económico de la *seguridad democrática*?

JAIRO ESTRADA ÁLVAREZ¹

La finalidad principal del presente trabajo consiste en analizar las especificidades de la crisis capitalista y las perspectivas del proyecto político económico neoliberal en Colombia. En desarrollo de ese propósito, el trabajo se ha dividido en nueve apartes. En el primero, a manera de contexto, se hacen algunas consideraciones sobre la actual crisis capitalista mundial. En segundo lugar, se abordan los discursos gubernamentales sobre la crisis, que muestran una fuerte intencionalidad política tendiente a evitar el desgaste del régimen de la *seguridad democrática*. Seguidamente, en tercer lugar, se analizan los rasgos de la crisis colombiana considerando la dinámica interna del ciclo económico y su concatenación con la tendencia mundial del movimiento del capitalismo. Se sostiene, en ese sentido, la tesis de que la crisis nos es simplemente una crisis externa, importada, sino que ella responde también al agotamiento de la fase expansiva del ciclo interno del

1. Jairo Estrada Álvarez. Profesor del Departamento de Ciencia Política. Director del Grupo Interdisciplinario de Estudios Políticos y Sociales, Universidad Nacional de Colombia. Integrante de los grupos de trabajo de CLACSO sobre economía mundial e integración latinoamericana. Miembro de la Red de Estudios de la Economía Mundial - REDEM. Director de ILSA. Director de la Revista *Espacio crítico* (www.espaciocritico.com)

capital. En el cuarto apartado del trabajo, se examinan algunos efectos de la crisis sobre el aparato productivo, el sector externo, las finanzas del Estado y el endeudamiento público, así como sobre las condiciones de vida y de trabajo de la población. Aquí se muestra que los diferentes indicadores registran un marcado deterioro, y que no hay lugar para las versiones, en extremo optimistas del gobierno, sobre una pronta salida de la crisis.

En el quinto acápite, se aborda el estudio de las políticas gubernamentales frente a la crisis, planteándose que ellas no representan una ruptura frente a las políticas neoliberales que han imperado durante las últimas décadas y, más bien, se inscriben dentro de una línea de continuidad de tales políticas. Sólo algunas medidas, muy parciales por cierto, se han desmarcado relativamente de la ortodoxia económica predominante en el país. En ese sentido, en sexto lugar, el trabajo afirma que en el marco de las discusiones sobre las salidas a la crisis, ésta es usada –por el gobierno y sectores de la tecnocracia– para ambientar y fundamentar un nuevo ciclo de reformas estructurales para dar continuidad y profundizar al proceso de *neoliberalización*.

El texto se propone, en séptimo lugar, analizar los impactos de la crisis sobre las configuraciones recientes del régimen político. En ese aspecto, se señala que ella abre objetivamente posibilidades de un resquebrajamiento del neoliberalismo autoritario, en dependencia de la movilización social y popular y de la acción política de fuerzas democráticas y de izquierda. A continuación, en el acápite octavo, el trabajo se ocupa de los efectos de la crisis sobre las condiciones de financiación de la guerra contrainsurgente en Colombia y muestra cómo un sostenimiento de la política gubernamental en ese sentido sólo sería posible recurriendo a mayores impuestos o incrementando el endeudamiento. Por último, en las consideraciones finales se destaca que, independientemente de la forma y de las especificidades asumidas por la crisis, ella genera nuevas condiciones para la crítica al capitalismo, el despliegue de subjetividades anticapitalistas y la acción política de los trabajadores.

Introducción

Todo parece indicar que la actual crisis mundial es una de las grandes crisis de la historia del capitalismo, solamente comparable con la Gran Depresión de 1929 a 1933². No se trata en todo caso de una crisis que anuncie

2. Para un análisis histórico de la crisis, véase Robert Brenner (2009) “Un análisis histórico-económico clásico de la actual crisis”, *Sin Permiso*, Madrid, 22 de febrero.

del derrumbe del capitalismo. En lo esencial, puede afirmarse que la crisis capitalista actual es una crisis económica y financiera que ha tenido –aunque no de manera exclusiva– los rasgos propios de una crisis de sobreacumulación y de especulación. Su dimensión económica y financiera se ha entrelazado de manera fuerte con otras tendencias a la crisis (estructural) del desarrollo capitalista de las últimas décadas en los campos de la alimentación, la energía y el medio ambiente. En ese sentido, la crisis actual es una crisis de la tendencia histórica de la acumulación capitalista en su fase neoliberal. Sus posibilidades de superación y su desenlace dependerán no sólo de las capacidades autoreproductivas que pueda desplegar el sistema mediante la búsqueda de nuevas soluciones espacio-temporales de acumulación, sino de la misma acción política de los trabajadores y de los sectores populares, de los movimientos sociales y de sus organizaciones.

La crisis no es simplemente especulativa o de codicia, o una crisis de las políticas neoliberales. Quienes así la han caracterizado, han pretendido despojarla de su naturaleza capitalista, para mostrarla como el resultado de los excesos en la sofisticación del negocio financiero, del afán desbordado por obtener ganancias a cualquier precio, o de fallas en los mecanismos de regulación del sistema a través de la política económica, por ejemplo, por la reducción o la eliminación de los controles estatales sobre los mercados. Al explicarse la crisis de esa forma, sus posibilidades de superación se simplifican: bastaría la implantación de medidas de (re)ingeniería financiera o el retorno a un keynesianismo renovado. Estos enfoques, si bien contienen importantes elementos de crítica a la especulación financiera y al neoliberalismo, se desenvuelven dentro del marco de los intereses capitalistas y de la búsqueda de salidas capitalistas. Por ello no hay que hacerse ilusiones con el *progresismo* de la *heterodoxia* de los economistas ahora de moda: Joseph Stiglitz y Paul Krugman. Las medidas de salvación de los bancos han llegado al extremo de ser presentadas en Estados Unidos como el *regreso del socialismo*.

Aunque el fundamento de la crisis se encuentra en buena medida en la sobreacumulación de capital y la especulación financiera, es decir, en el ciclo del capital productivo y del capital ficticio, la actual crisis es también una crisis de regulación y de las políticas neoliberales, así como de la arquitectura y la organización institucional que asumiera el capitalismo a partir de la década de 1970. Ella ha puesto en evidencia precisamente los límites de un régimen de acumulación sustentado, *primero*, en la reestructuración neoliberal que dispuso el Estado para propiciar condiciones

excepcionales de valorización capitalista a través de la mayor explotación de la fuerza de trabajo (la llamada flexibilización laboral) y la generación de todo tipo de incentivos a los flujos y la acumulación de capital; *segundo*, en el desarrollo de la acumulación extensiva mediante la ampliación de la geografía del capital (la llamada globalización) hacia nuevas regiones del mundo (los países de la antigua Unión Soviética y de Europa del este, China, India, entre otros); y *tercero*, en la *financiarización* de la economía mediante el estímulo del negocio financiero, incluida su sofisticación con los mercado de derivados³.

Los mismos factores que en su momento le permitieron al capitalismo superar la crisis iniciada a principios de la década de 1970, se constituirían en los generadores de la actual, al invertir su tendencia de comportamiento. La reestructuración neoliberal terminaría restringiendo la demanda dado el estrangulamiento de los ingresos de los sectores medios y populares y la consecuente redistribución del ingreso a favor de los ricos; la acumulación extensiva exacerbaría el problema de la sobreproducción al añadir capacidad productiva a nivel mundial; la *financiarización* estimularía la tendencia a la autonomización extrema del capital ficticio, acentuando la desconexión entre la economía real y la economía financiera⁴.

La crisis no representa ni el fin de la economía de *libre mercado* ni el regreso al intervencionismo de Estado. Esa es una versión distorsionada de la organización actual del capitalismo, que pretende mostrar que los problemas del sistema capitalista son simplemente de regulación y que bastaría con cambiar el acento y la orientación de las políticas y, en particular, de la política económica. Por ello, se ha anunciado en forma equivocada el fin del neoliberalismo. En ese sentido, debe recordarse que éste no ha sido sólo una política económica. Se ha tratado también de un proyecto político, económico y cultural, uno de cuyos principales soportes ha estado precisamente en la dirección política del proceso económico por parte del Estado. Si algún proyecto ha sido intervencionista a favor del capital, ese ha sido el proyecto neoliberal. La fórmula salvadora no es, pues, *más Estado, menos mercado*. Si el neoliberalismo se reduce a una política económica, se puede hablar de la crisis del neoliberalismo; si el neoliberalismo

3. Walden Bello, "Todo lo que usted quiere saber sobre el origen de esta crisis pero teme no entenderlo", *Sin Permiso*, Madrid, 05.10.2006.

4. Tal desconexión posee en todo caso nuevas particularidades dada la fuerte imbricación entre el capital productivo y el capital ficticio.

se identifica con una fase capitalista de ofensiva contra los trabajadores, a favor del capital, todavía no ha agotado sus posibilidades.

La crisis tuvo como epicentro a Estados Unidos, pero rápidamente se propagó y adquirió los rasgos de una crisis mundial del capitalismo. Ella representa una extensión y reproducción de fenómenos de crisis con características similares que habían afectado parcialmente y en distintos momentos diferentes regiones del mundo (Japón a lo largo de la década de 1990, México en 1994, el sudeste asiático en 1998, Rusia en 1998, Argentina en 2001, entre otros). En el caso de Estados Unidos, con la crisis actual se dio continuidad a las tendencias críticas de principios de siglo de la *nueva economía*, cuya salida condujo precisamente –dadas las políticas económicas de entonces–, primero, al acelerado endeudamiento de los hogares norteamericanos con créditos de vivienda y de consumo y, luego, a la burbuja inmobiliaria, cuando estos créditos fueron titularizados y transados en los mercados de valores. En tales mercados, esos títulos adquirieron altos niveles de sofisticación a través de los derivados financieros, promovidos por uno de los principales exponentes de la especulación financiera: la banca de inversión.

Debido al notable deterioro de las condiciones de endeudamiento y la consecuente imposibilidad de pagar los créditos, los fundamentos sobre los cuales se había montado la especulación se deshicieron; el sistema demandó en forma reactiva y violenta los ajustes necesarios. Se desató la crisis, inicialmente en la forma de una crisis de especulación financiera, pero mostrando desde el inicio sus estrechos vínculos con el ciclo del capital productivo. Por cuenta de la alta articulación del mercado mundial de capitales y estimulada por las tecnologías de la información y de las comunicaciones, la crisis se propagó rápidamente en el conjunto del sistema capitalista y asumió los rasgos de una crisis mundial.

Lo que al inicio se mostró como un nuevo episodio de crisis financiera con características similares a las ya ocurridas en los lustros precedentes, rápidamente asumió otros rasgos dadas las actuales configuraciones del capital y las variadas modalidades de fusión entre sus diferentes formas. La crisis se propagó al conjunto de la economía. Por lo pronto, pese a las reiteradas manifestaciones de deseo, ella persiste; se discute sobre sí ya se ha tocado fondo y se afirma que cuando ello ocurra la recuperación será muy lenta.

La crisis de la economía estadounidense afectó de manera creciente a Europa, Japón, China e India, así como a la mayoría de los países

latinoamericanos. Ello es el resultado de la mundialización de la producción capitalista, de la transnacionalización de las economías y del fuerte acoplamiento de los procesos de acumulación a escala planetaria. A manera de ilustración: el principal mercado exterior de China son los Estados Unidos; China, a su vez, importa materias primas y bienes intermedios de Japón, Corea y del sudeste asiático; China es uno de los principales tenedores de bonos de deuda pública estadounidense (más el 25% del total de los bonos); cerca del 30% de las ganancias de las empresas multinacionales de Estados Unidos provienen de sus inversiones en China. En esas condiciones, las economías de Estados Unidos, China y el sudeste asiático se encuentran atadas a la misma cadena, de tal suerte que el destino de las economías asiáticas se encuentra definido en gran medida por la tendencia de la economía estadounidense.

Pero ese no es sólo el caso de las economías asiáticas; también lo es de las europeas y las latinoamericanas, aunque la situación de las primeras reviste particularidades debido al tamaño de su mercado y a los acuerdos dentro de la Unión Europea. Este fuerte entrelazamiento (y dependencia frente a la economía estadounidense) explica por qué las grandes economías del mundo se aprestaron a salvar el dólar y a disponer recursos para recuperar y garantizar una cierta estabilidad de la arquitectura financiera mundial del capitalismo.

En el caso de América Latina, la crisis se ha sentido con fuerza, pese a que en un principio la tecnocracia llegara a aseverar que la acumulación de reservas internacionales por parte de la mayoría de países se había convertido en un colchón que reduciría sus efectos. Ningún país ha quedado excluido de ellos; trátase de gobiernos de derecha o de gobiernos progresistas. El mayor o menor impacto ha dependido del grado de exposición de la respectiva economía a la economía mundial y de la forma como se ha enfrentado la situación de crisis. Su incidencia ha sido desigual y diferenciada.

A manera de ejemplo: algunos de los países que representan la avanzada de los proyectos neoliberales y se caracterizan por poseer regímenes económicos de alta exposición a favor de los intereses del capital transnacional, han visto afectada sensiblemente su economía. Tal es la situación de México y Chile, principalmente; también de Colombia. A otros países que se encuentran inmersos en los circuitos del capital financiero transnacional, como es el caso de Brasil, la crisis también los ha castigado con severidad. Los gobiernos progresistas de América Latina tampoco han estado exentos de sus efectos. La caída de los precios de los productos energéticos,

especialmente del petróleo, ha incidido sobre el crecimiento económico y las posiciones de comercio exterior de Venezuela, Ecuador y Bolivia.

La crisis puso al desnudo los impactos de décadas de política neoliberal en América Latina. Los procesos de neoliberalización impulsados durante las últimas décadas acentuaron la dependencia y forzaron una reestructuración económica regresiva, provocando una creciente vulnerabilidad frente al comportamiento de la economía capitalista mundial. La alta dependencia de un número importante de economías de la región de la producción y exportación de productos energéticos, materias primas, productos agrícolas ha generado efectos contradictorios. Mientras el ciclo económico transcurrió por su fase expansiva y la especulación financiera en los mercados de futuros lo permitió, se asistió a un mejoramiento sustancial de los precios de tales bienes, contribuyendo a mejores condiciones para el crecimiento y alentando incluso –en algunos países– una expansión sin precedentes de la inversión minera, así como la producción de agrocombustibles.

Con la crisis, el escenario cambió de manera sensible. La crisis financiera produjo ajustes en los precios especulativos de tales productos, que se sumaron a la caída propiciada por la reducción de la demanda mundial. Como consecuencia de ello, se han apreciado una reducción de los ingresos por concepto de exportaciones y presiones sobre las balanzas comercial, en cuenta corriente y de pagos. Igualmente, y también como resultado de lo anterior, se encuentra en curso un nuevo ciclo de endeudamiento externo que, unido a un cierto comportamiento errático de las monedas latinoamericanas, pondrá nuevamente la problemática de la deuda externa en la agenda política.

Más recientemente, dados los nuevos cambios en los precios de las materias primas y de los productos agrícolas y energéticos, se suavizaron relativamente los impactos de la crisis sobre algunos indicadores macroeconómicos. No ha ocurrido lo mismo con las finanzas públicas que muestran una tendencia al franco deterioro, así como con la deuda pública y privada que viene incrementándose aceleradamente. Desde el punto de vista social la crisis ha acentuado las desigualdades e incrementado la pobreza e indigencia en la región. Las perspectivas de estas economías se encuentran en buena medida en función de lo que ocurra con la producción y la demanda a nivel mundial por tales productos. Por lo pronto, no parece apreciarse, como ya se dijo, a una etapa de recuperación sostenida de la economía mundial.

Las respuestas frente a la crisis han sido diversas, pero han primado las *soluciones nacionales* y, en buena medida, la lógica de *sálvese quien pueda*. América Latina no ha logrado avanzar hacia un tratamiento regional de salidas a la crisis. La diversidad de proyectos políticos de derecha, de centro o de izquierda ha hecho muy difícil ese propósito, aunque se han producido acuerdos bilaterales pragmáticos y esfuerzos más colectivos, con limitaciones, en el ALBA. Lo que ha predominado, en todo caso, han sido las medidas unilaterales de los respectivos países.

La experiencia colombiana de la crisis se inscribe dentro de los casos de economías con una alta exposición frente a los movimientos de la economía mundial y de políticas de neoliberalización extrema, que se acompañan de una marcada tendencia autoritaria del régimen político.

La crisis capitalista en el discurso gubernamental

En un primer momento, como ocurrió en otros países del subcontinente, el gobierno desestimó la crisis capitalista y señaló que la economía colombiana se encontraba blindada frente a eventuales impactos. Corría ya el segundo semestre de 2008. Esa postura gubernamental subvaloraba el carácter de la crisis, presumía que el fenómeno se limitaría al centro del capitalismo y que las operaciones de salvamento del sector financiero, del entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, lograrían revertir la tendencia contractiva de la actividad económica.

Por otra parte, se basaba en la suposición de una situación macroeconómica sólida, de relativa estabilidad cambiaria, con control inflacionario y situación fiscal aceptable, acompañada del incremento registrado en las reservas internacionales durante los últimos años. Pese a la crisis capitalista, el gobierno confiaba en que se lograría mantener la dinámica exportadora –buscando incluso nuevos mercados–, y sostener el nivel de inversión extranjera profundizando la neoliberalización económica.

En suma, el presunto blindaje frente a la crisis se encontraba en uno de los factores que la había provocado: la persistencia en las políticas del Consenso de Washington. ¿Paradoja? No, más bien cinismo. A ello se agregaba la consideración parroquial acerca del significado de la política de la *seguridad democrática*, cuya retórica presume una producción permanente de confianza para el mundo del capital. En el ámbito colombiano, la fase expansiva del ciclo económico había coincidido con el mandato del presidente Uribe. Tal situación había permitido posicionar en la opinión

pública la idea que el crecimiento económico se explicaba por los efectos bondadosos de la *seguridad democrática*.

La dinámica de la crisis, su creciente propagación mundial y su profundización, así como el conocimiento de nuevos y preocupantes episodios, llevarían al gobierno hacia fines de 2008 y principios de 2009 a afirmar que la crisis sí afectaría la economía colombiana. La crisis capitalista se caracterizaba en todo caso simplemente como una “desaceleración del crecimiento mundial”, aunque se indicaba que Estados Unidos atravesaba por “la crisis más fuerte de las últimas décadas” y que “las repercusiones de la crisis a nivel mundial no (serían) despreciables”⁵. A la aceptación de eventuales impactos de la crisis, le siguió la tesis de que el país se encontraba en todo caso preparado para enfrentarlos.

El discurso gubernamental se basó en ese momento en las afirmaciones de funcionarios del Fondo Monetario Internacional que habían dictaminado acerca de la buena salud de la economía colombiana. A juicio de estos funcionarios, “la aplicación de políticas macroeconómicas adecuadas y la amplia gama de reformas estructurales” (neoliberales) habrían contribuido “a acelerar el crecimiento y a reducir las vulnerabilidades”; el país estaría “bien preparado para afrontar los desafíos que (planteaba) la desaceleración del crecimiento mundial”; requeriría sí “seguir aplicando medidas de política con flexibilidad y oportunamente”. El FMI destacó la solidez del sistema financiero y garantizó su solvencia aún en escenarios extremos⁶. En suma, se aceptaban impactos de la crisis, pero se aseveraba que las políticas neoliberales representaban la mejor arma para enfrentarlos. Ello con la bendición del FMI, institución que por cierto había perdido tanta o más credibilidad a nivel internacional que las mal llamadas calificadoras de riesgo, dada su manifiesta incapacidad para prever la crisis mundial⁷.

En la última semana de marzo de 2009 se tornó imposible seguir minimizando la crisis. Los hechos terminaron liquidando cualquier ejercicio en sentido contrario. En ese momento ya se había observado una caída abrupta de la producción industrial, la cual alcanzó más del 10.7 por ciento

5. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. “Impacto y oportunidades de la crisis”, Bogotá, febrero 4 de 2009.

6. *Ibíd.*

7. Después de la reunión del G-20 en marzo de 2009 en Londres y de su espaldarazo al FMI con la recapitalización de 1.2 billones de dólares, es manifiesto el interés de los países del centro capitalista por convertir esta institución en un garante de la gestión (controlada) de eventuales salidas a la crisis.

en los primeros meses de año en comparación con el mismo período del año anterior; la actividad comercial se había reducido sensiblemente, y se había presentado un aumento de la tasa de desocupación, que llegó al 14.2 por ciento. Fue el propio Presidente Uribe quien en un foro con estudiantes universitarios realizado el 24 de marzo reconoció la situación de crisis y advirtió sobre la tendencia al mayor deterioro de la situación económica y social. A la voz de Uribe siguieron las afirmaciones de otros funcionarios gubernamentales, entre ellos el ministro de Hacienda y Crédito Público, Oscar Iván Zuluaga. El discurso gubernamental del blindaje frente a la crisis devino en una “honda preocupación”, que se ha reiterado en diversos foros y eventos, incluida la intervención del presidente Uribe en la quincuagésima Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, celebrada en la ciudad de Medellín a finales de marzo de 2009.

Los datos consolidados sobre el comportamiento del PIB en 2008, así como las proyecciones para 2009, hablan por sí solos. En 2008 se produjo una fuerte caída en el ritmo de crecimiento del PIB. Mientras que en 2007 se había registrado un aumento del 7.5 por ciento, el año pasado apenas alcanzó 2.5 por ciento. Ese guarismo dio al traste con los datos gubernamentales que habían anunciado un crecimiento del PIB de 3.5 en 2008 y habían estimado una desaceleración al 3 por ciento en 2009. Lo que vino fueron los ajustes en los estimativos para este año, que en su mayoría se situaron en un rango entre el 1 y el -1 por ciento⁸. A medida que se han conocido nuevos datos, los pronósticos han mostrado una tendencia a la baja. Algunas estimaciones hablan de una caída del PIB de tres puntos⁹. Las últimas proyecciones del FMI establecieron un crecimiento de 0.0 por ciento. El gobierno, por su parte, fijó una meta de 0.5 por ciento¹⁰. En general, tal y como ha ocurrido con las estimaciones sobre el comportamiento de la economía mundial por parte del FMI y del Banco Mundial, no sólo no ha habido unidad de criterios, sino que se ha apreciado la intención de *suavizar* la magnitud y el alcance de la crisis con estimaciones que han tenido que ser corregidas permanentemente, y a la baja.

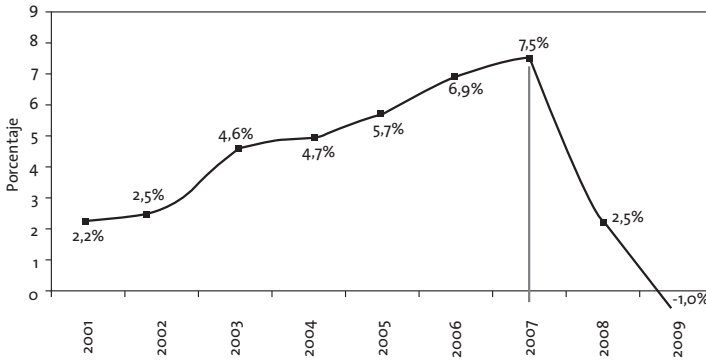
La evidencia empírica muestra que la economía colombiana se encuentra

8. Véase la columna de *El Tiempo* de Carlos Caballero Argáez del 28 de marzo de 2009, “¿Por fin se despertó el gobierno?”. La estimación de *The Economist* es de -1 por ciento.

9. Armando Montenegro, “Recesión y gasto público”, *El Espectador*, 25 de abril de 2009.

10. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, *Marco fiscal de mediano plazo 2009*, Bogotá, D.C., 2009.

Gráfico 1
Ciclo económico
Comportamiento del PIB (anual)



Fuente: DANE y proyecciones de crecimiento.

en crisis y que la fase expansiva del ciclo económico, que había coincidido hasta ahora con los períodos de gobierno de Uribe, llegó a su fin (ver gráfica 1). Aún más, el comportamiento del PIB a lo largo de 2008 mostró una desaceleración continua: durante el primer trimestre la economía creció 4.5 por ciento, en el segundo lo hizo en 3.8, en el tercero cayó a 3.1, en el cuarto a -0.7, y para todo el año registró, como ya se dijo, un 2.5 por ciento.

Ello permite afirmar que el gobierno se empeñó en ocultar –con la ayuda de los medios masivos de comunicación y de los representantes de los principales gremios económicos– la tendencia en curso y en desvirtuar incluso la posibilidad de la crisis. Es claro que tras de ello se encontraban motivaciones políticas. Hasta el ex asesor económico de Uribe, Rudolf Hommes, se manifestó en ese sentido: “Decir que la economía colombiana estaba blindada (...) era una tontería que solamente pudo hacer camino en un país donde la gente no piensa y es completamente dependiente de lo que le hacen creer los medios, que, con frecuencia cada vez mayor, son simples altavoces del Gobierno. Pero una tontería de superior tamaño, rayana en irresponsabilidad, es que el Gobierno haya creído su propio cuento y no se haya alistado para afrontar la crisis. Algunos miembros del sector privado, sesgados por los resultados de sus estados financieros, han coadyuvado a crear esa fantasía que ha dejado al país sin preparación”¹¹.

11. Rudolf Hommes, “La política boyante y la economía al gairete”, *El Tiempo*, 27 de marzo de 2009.

La configuración autoritaria del régimen político implicaba que un cuestionamiento (incluso dentro del bloque de poder) a la situación económica podía ser comprendido como una deslealtad frente a la política de *seguridad democrática*, en momentos en los que se acentuaba la discusión nacional sobre el trámite en el Congreso de un referendo para posibilitar una nueva reelección del presidente Uribe.

Algunos rasgos de la crisis colombiana

Un examen del ciclo colombiano permite aseverar que la crisis actual no puede ser reducida –como se ha pretendido en círculos gubernamentales¹² y de los gremios económicos– a una crisis proveniente del exterior que impacta sobre la economía colombiana. La crisis capitalista mundial llegó a acentuar la tendencia a la crisis interna que ya se expresaba en la desaceleración del crecimiento económico, en la caída de la producción industrial y de la construcción, en la reducción de la demanda interna y en el estancamiento de otros sectores de la actividad económica.

Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE– sobre el comportamiento de los sectores de la actividad económica durante el último trimestre de 2008 fueron ilustrativas al respecto: la industria manufacturera y la construcción cayeron en 8 por ciento, la agricultura y el comercio en –0.6 y –0.1 por ciento, respectivamente; los servicios sociales y el transporte crecieron apenas 0.5 y 0.8 por ciento; solamente el sector financiero y la minería registraron aumentos importantes de 4 y 6.6 por ciento, respectivamente, aunque por debajo de la tendencia de los últimos años¹³.

Así es que los intentos de reducir la crisis colombiana actual a una crisis que viene desde fuera, además de desconocer la dinámica interna de la economía, buscan exculpar las políticas neoliberales que se han implantado durante las últimas décadas en el país. La crisis es también, como a nivel mundial, una crisis del proceso de neoliberalización. Pero no exclusivamente. Lo que la hace especialmente aguda y profunda es su creciente sincronización con la crisis economía mundial, a diferencia de la última crisis (1998-2001) que fue más bien del orden local.

Son múltiples los factores que explican la crisis actual. Como ya se

12. Al respecto, ver entrevista con el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Revista *Semana*, 22 de marzo de 2009.

13. Véase, *Portafolio*, Bogotá, 26 de abril de 2009.

señaló, la dinámica expansiva del ciclo económico llegó a su fin en 2007, a ello le siguieron la desaceleración durante buena parte de 2008 y, luego, la caída reciente¹⁴. Tal tendencia se fue concatenando a lo largo de 2008 con la crisis mundial, cuyos efectos habrían de sentirse de manera desigual y diferenciada desde el punto de vista sectorial.

La crisis y el aparato productivo

En el sector productivo, los impactos llegaron más bien diferidos y se manifestaron con fuerza desde fines de 2008 y sobre todo a lo largo del primer semestre de 2009. Durante los últimos doce meses, hasta junio de 2009, la producción real cayó 8.4 por ciento. Este comportamiento se debió fundamentalmente al descenso en de la producción de las industrias de vehículos automotores (-44 por ciento), productos de hierro y aceros (-19,6 por ciento), confecciones (-24-2 por ciento) de productos de molinería y almidones (-11,1 por ciento) y sustancias químicas básicas (-10.5 por ciento), entre otros. Las ventas reportadas por la industria disminuyeron mantuvieron su tendencia a la baja y el empleo se cayó -7.0 por ciento con relación al mismo período del año anterior¹⁵.

Por su parte, la agricultura –que ya mostraba un crecimiento débil y tendencias al estancamiento durante los últimos años– también resultó afectada por la crisis, registrando una caída de 0.8 por ciento durante el primer trimestre de 2009. En ese mismo período, en la industria de la construcción, la tendencia fue contradictoria, aunque registró un crecimiento promedio de 4.1 por ciento. Mientras que la construcción de vivienda cayó 14.1 por ciento, la construcción de obras civiles tuvo una aumento significativo de 21.2 por ciento. Este incremento provino principalmente de proyectos que se encontraban en curso, de gastos aplazados y, sobre todo, de inversiones de gobiernos locales, previstas en sus planes de desarrollo.

La minería no se vio afectada por la crisis y mantuvo la tendencia expansiva de los años anteriores; se constituyó en un sector que contrarresta la

14. El bajo crecimiento de 2008 obedeció “al menor dinamismo de la demanda interna que pasó de crecer 8.5 por ciento en 2007 a 3.5 por ciento en 2008. Este comportamiento se debió principalmente a una sensible caída del consumo de los hogares, cuyo crecimiento anual fue de 2.5 por ciento, frente a 7.6 por ciento anual en 2007”. Otro tanto ocurrió con el consumo público que bajó de un 4.5 a un 1.3 por ciento durante el mismo período. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, *Marco fiscal de mediano plazo 2009*, Bogotá, 2009.

15. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, *Muestra mensual manufacturera*, Bogotá, junio de 2009.

tendencia general al crecer un 10.6 por ciento durante el primer trimestre de 2009. Su comportamiento se explica por las inversiones de empresas multinacionales realizadas en años anteriores, especialmente en petróleo y carbón, que pese a la crisis han incrementado sus producciones.

La actividad comercial, a su vez, se vio afectada por la caída de la demanda interna como resultado de la mayor desocupación y, en general, de la precarización del trabajo que la crisis ha provocado. Según la Encuesta de Opinión Conjunta, durante el primer semestre de 2009 las ventas decrecieron 5 por ciento (hacia el mercado interno la caída fue de 4.5 por ciento)¹⁶. El reporte del DANE de junio confirma esa estimación. Las ventas reales cayeron durante ese período 5.2 por ciento¹⁷.

La crisis y la especulación financiera

La actividad financiera y bursátil merece especial atención. En el caso del mercado bursátil, las incidencias de la crisis fueron inmediatas, luego del *crash* mundial. Según Libardo Sarmiento, el índice general de la Bolsa de Colombia (IGBC) alcanzó una pérdida cercana al 36 por ciento en enero de 2009. A pesar de la leve recuperación al terminar 2008, en enero siguió la tendencia descendente al igual que en la mayoría de las bolsas del mundo, que registraban pérdidas diarias entre 2 y 5 por ciento¹⁸. Luego vendría una relativa estabilización acompañada de comportamientos erráticos, tal y como ha ocurrido en otras bolsas de valores. La tendencia que parece consolidarse es la del crecimiento especulativo, una especie de “burbuja local”. Durante los primeros siete meses de 2009, el IGBC se había valorizado 37 por ciento y las emisiones de bonos se habían incrementado en 29 por ciento¹⁹.

El capitalismo local le sigue apostando a la especulación financiera. Empresas vinculadas a la actividad industrial, en franca caída, han visto incrementar sus valores en bolsa. Tal es el caso, por ejemplo, de Fabricato, Enka y Tablemac. Las acciones de la Empresa de Teléfonos de Bogotá se dispararon en un 70 por ciento, luego del anuncio del alcalde de Bogotá de

16. *Portafolio*, 13 de agosto de 2009.

17. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, *Muestra mensual de comercio al por menor*, Bogotá, junio de 2009.

18. Libardo Sarmiento Anzola, “Crisis del sistema monetario mundial y concentración financiera en Colombia”, Suplemento *Desde Abajo*, Bogotá, enero-febrero 2009, p. 27.

19. “Cesó la horrible noche, pero...”, *Revista Semana*, Bogotá, 8 de agosto de 2009.

buscar un *inversionista estratégico*. El valor de la acción de Ecopetrol alcanzó la histórica cifra de \$2.660 pesos, después del anuncio de las supuestas reservas de un yacimiento en exploración (la información tuvo que ser desmentida) y pese a la caída de las utilidades en un 58 por ciento durante el primer semestre de 2009. Las acciones del Éxito aumentaron en un 51.5 por ciento, a pesar de la caída del comercio al detal en el 5 por ciento²⁰. Como se puede apreciar, las ganancias que no se obtienen en la actividad productiva, se compensan con la especulación financiera y bursátil.

A diferencia de la tendencia mundial, en la que el sector financiero se vio afectado severamente, otra ha sido la situación en el caso colombiano. Este sector creció en 2008 en 4 por ciento –cifra en todo caso más baja que la de los últimos años–, y registró utilidades de 6.58 billones de pesos, 19 por ciento superiores a las de 2007. Del total de ganancias, a los bancos les correspondió 4.86 billones (28 por ciento más que el año anterior). El resto se distribuyó entre las aseguradoras, las firmas comisionistas, los fondos de pensiones y las fiduciarias. Sin embargo, no sucedió lo mismo con los dineros que las entidades financieras le administran a sus clientes: las utilidades se redujeron en 49 por ciento, es decir, en 4.21 billones de pesos.

Por otra parte, durante 2008 se mantuvo un importante ritmo de otorgamiento de créditos (cerca de 300 billones de pesos), equivalente al 63 por ciento del PIB colombiano. Llamam la atención, no obstante, dos cosas: primero, el descenso en el crecimiento anual de los desembolsos en 7 y 17 puntos con relación a 2007 y 2006, respectivamente; segundo, que la mayor cantidad de ellos estuvo destinada al pago de sobregiros y no a actividades de inversión²¹. Se trata de indicadores importantes sobre la situación de las actividades que financia el sector financiero, pero, al mismo tiempo, de los límites que tiene la actividad financiera misma en la coyuntura actual.

El comportamiento de 2008 se ha mantenido durante los meses en los que se ha intensificado la crisis productiva. En efecto, de enero a abril de 2009, el sector creció 4.7 por ciento y sus utilidades se incrementaron en 51 por ciento (equivalentes a 3.14 billones de pesos) respecto al mismo período del año anterior. Los responsables de tal aumento fueron las empresas financieras

20. Aurelio Suárez Montoya, “Desempleo, deflación de alimentos, revaluación e inflación de valores bursátiles”, Bogotá, 10 de agosto de 2009 (mimeo).

21. Véase: http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/2009-02-14/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-4815148.html

que derivan sus ingresos del mercado de valores (comisionistas de bolsa, administradoras de fondos de inversión, fondos privados de pensiones), que se vieron favorecidas por la recuperación del mercado bursátil, como ya se dijo, y del valor de los bonos de deuda pública (TES). Los bancos, si bien obtuvieron igualmente utilidades, vieron desacelerar su ritmo de crecimiento (del 40 al 17 por ciento). La apuesta en el negocio financiero continúa siendo la especulación. Las instituciones bancarias han preferido destinar sus recursos al mercado de valores en lugar del prestarlos, entre otras razones porque se registra un aumento de la tasa de morosidad al 4.8 por ciento del total de los préstamos (7 billones de pesos se encuentran vencidos)²².

Una eventual extensión de la crisis al sector financiero podría provenir más desde el interior que desde fuera. En efecto, en la medida en que la crisis económica se agudice –o se prolongue– se deteriorará la capacidad de pago de las empresas y de los hogares, o podría estallar la burbuja accionaria que se ha venido montando como reacción a la crisis. En Colombia no se sintió el impacto de multinacionales de la banca que controlan parte de la actividad financiera (como el Citibank o los bancos españoles), cuyos activos se desvalorizaron y han tenido pérdidas importantes en Estados Unidos y Europa. Sus sucursales siguen más bien transfiriendo utilidades a las casas matrices. El hecho de que el sector financiero no estuviera involucrado de manera importante en el negocio mundial de los derivados financieros ha sido un factor que le ha podido dar una transitoria tranquilidad.

Considerando lo anterior, la trayectoria de la crisis colombiana ha mostrado una tendencia distinta frente a lo que ha sido el devenir de la actual crisis mundial que, como es sabido, se inició como una crisis hipotecaria, avanzó hacia una crisis financiera y devino en crisis económica. Si la crisis económica en Colombia se articulara con una crisis financiera, sus impactos políticos, económicos y sociales serían impredecibles.

De particular importancia en ese sentido será el comportamiento futuro de los créditos hipotecarios y de los créditos de consumo, así como de los fondos privados de pensiones. Una eventual agudización de la crisis y una extensión de sus impactos a los fondos privados afectarían a millones de ahorradores y los expropiarían de una parte importante de sus ahorros²³. Por lo pronto, no es esa la circunstancia.

22. Véase *Portafolio*, 3 de junio de 2009.

23. Los efectos de la crisis se sumarían a los problemas estructurales de este diseño neoliberal del aseguramiento en pensiones. Estudios recientes

Pese a que en Colombia no se está en presencia de una crisis financiera, es importante señalar, en todo caso, que en 2008 se presentó el derrumbe de varias empresas captadoras de dinero, conocidas como *pirámides*. Tales empresas habían desplegado su actividad al margen del sector financiero, aprovechando vacíos normativos, la falta de controles estatales (gracias a la desregulación neoliberal), el descontento de sectores sociales frente a los altos costos de la intermediación financiera y los bajos rendimientos ofrecidos por las grandes instituciones bancarias, el limitado de acceso a la banca de sectores populares e informales y las aspiraciones de enriquecimiento rápido y fácil, que han hecho carrera en el país por efecto de la cultura mafiosa y narcotraficante y de la corrupción. Se trataba desde luego de inversiones especulativas a la espera de espectaculares rendimientos. Después de varios años de reconocida actividad pública, tales empresas fueron declaradas ilegales, intervenidas e identificadas como centros de lavado de dineros provenientes del narcotráfico y del paramilitarismo. Sus nexos con instituciones y funcionarios del Estado se han conocido a granel. Lo cierto es que se calcula que varios millones de colombianos, en su mayoría de sectores medios y populares de la población, perdieron sus ahorros en dichas empresas en una cuantía que se estima en 5 billones de pesos.

El derrumbe de las captadoras de dinero (que funcionaban como la *pirámide Monzi*) provocó una crisis social de grandes proporciones, especialmente, en la región surcolombiana (aunque también se manifestó en otros lugares del país con menor intensidad), deprimió sensiblemente toda la actividad económica en esos lugares, y se constituyó en un factor que se sumaría a las tendencias internas de la crisis. Las pirámides del capitalismo globalizado también tuvieron sus expresiones locales. Colombia tuvo en David Murcia Guzmán su propio Bernard Madoff.

Por otra parte, las tendencias a la desaceleración económica ya se venían apreciando como resultado de la política monetaria del Banco de la República que, pese a los signos evidentes de crisis capitalista mundial, persistió en su política contractiva y de altas tasas de interés para privilegiar –como lo mandan los cánones del neoliberalismo monetarista– el control de la inflación sobre el crecimiento económico y el empleo²⁴. A ello se agregaron

muestran que del total de los ahorradores, solamente estaría en condiciones de pensionarse hasta un 30 por ciento de los afiliados a los fondos privados.

24. En su informe al Congreso, la Junta Directiva del Banco de la República señala que “la desaceleración de la actividad económica fue en parte el resultado de la acción de la política monetaria, que desde 2006 se orientó a moderar el crecimiento

otros factores como la revaluación del peso durante el primer semestre de 2008, la lenta ejecución de obras civiles, el incremento de los precios de las materias primas y las huelgas obreras (de Cerromatoso y de los corteros de caña) que afectaron la actividad económica²⁵.

En igual sentido, debe señalarse el deterioro de la actividad comercial con Estados Unidos, Venezuela y Ecuador, lugares de destino de una parte importante de las exportaciones colombianas de productos no tradicionales. En el caso del comercio con Venezuela y Ecuador, tal deterioro se ha visto afectado no sólo por las decisiones económicas de los respectivos países, sino también por las relaciones políticas inestables, particularmente después de la violación de la soberanía ecuatoriana por parte del gobierno de Uribe en marzo de 2008 (debe señalarse, en todo caso, que el volumen de la actividad comercial con Venezuela se había mantenido relativamente estable durante el primer semestre de 2009 y había permitido contrarrestar los efectos de la contracción de otros mercados).

La crisis y la tendencia de la economía mundial

En suma, la crisis económica en Colombia no es simplemente el resultado de la importación de una crisis externa. Sin duda, la crisis capitalista mundial ha incidido de manera sensible sobre la economía colombiana, y lo seguirá haciendo. Pero es evidente, al mismo tiempo, que tras el alto crecimiento del PIB en 2007, se escondía el fin del auge y el inicio de la desaceleración económica, primero, y luego, de la crisis actual. El fin del ciclo colombiano habría de coincidir con una gran crisis del capitalismo. Eso es lo que hace la crisis actual especialmente aguda y profunda y con posibilidades de impacto que trascienden el campo exclusivo de la economía. Las tendencias sectoriales son desiguales y diferenciadas. No se está en presencia de una crisis de todos los sectores de la actividad económica, pero predomina la tendencia de crisis en el conjunto de la actividad económica. Los comportamientos de coyuntura de corto plazo pueden variar, dada la relativa incertidumbre que caracteriza el comportamiento de la economía mundial.

Si se juzga por las proyecciones, la mayoría de ellas indica que aún no se

excesivo del crédito y de la demanda agregada, con el objetivo de contener las presiones inflacionarias y lograr una senda de crecimiento sostenible”, Banco de la República, *Informe de la Junta Directiva al Congreso*, Bogotá, marzo de 2009, p. 11.

25. *Ibíd.*, pp. 11-12

ha llegado al punto más bajo de la actividad económica y que, una vez éste se alcance, se asistirá a una lenta recuperación. Las más optimistas indican que el retorno del crecimiento podría observarse en 2011. De acuerdo con el Banco Mundial, en su informe sobre las *Perspectivas económicas mundiales*, se prevé que el crecimiento se contraiga el 1,7% este año. Se trataría de la primera caída de la producción mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Se proyecta que el PIB caerá el 3% en los países de la OCDE y el 2% en otras economías de ingreso alto. Según Hans Timmer, director de Tendencias mundiales del Grupo de análisis de las perspectivas de desarrollo del Banco Mundial, “aún si el crecimiento mundial se vuelve positivo en 2010, los niveles de producción permanecerán deprimidos, aumentarán las presiones fiscales, y el desempleo seguirá creciendo virtualmente en todo el mundo hasta bien avanzado 2011”²⁶.

Dadas las características mundiales de la crisis (y las tendencias de la economía), no es posible sostener la tesis del *desacople*, y menos teniendo en cuenta la apertura extrema de la economía colombiana, para significar con ello que el país tendría una dinámica propia al margen de la que marca el capitalismo mundial. Mientras en el corazón del capitalismo persista la crisis, debe esperarse que la tendencia mundial de la acumulación posea esa impronta. Las proyecciones mundiales indican una caída del PIB, registran que la actividad económica sigue descendiendo en Estados Unidos y Europa, y muestran una importante desaceleración del crecimiento chino. Tal comportamiento incide sobre los flujos de capital, la inversión extranjera, los precios de las materias primas y los productos energéticos, los movimientos de las remesas y, en general, sobre la demanda mundial. Todo ello genera condiciones de contexto desfavorables sobre el conjunto de la economía colombiana y la afecta de manera sensible. En ese sentido, los augurios locales de una salida de la crisis, incluso durante este año, parecen cantos de sirena, con una fuerte carga ideológica. La derecha colombiana está empeñada en salir inmune de la crisis, o al menos en aparentarlo así.

Algunos efectos de la crisis

Contrario a la afirmación de sectores de la tecnocracia neoliberal en el sentido de que el proceso de neoliberalización habría puesto a la economía

26. Banco Mundial, Comunicado de prensa, Washington, 31 de marzo de 2009. El 11 de junio, el Banco revisó sus proyecciones a la baja y estimó que la economía mundial experimentaría una reducción de casi el 3 por ciento.

en una posición favorable para enfrentar la crisis, todo indica que la apertura extrema a la que se ha visto sometido el país durante los últimos lustros –y que se ha acentuado durante el gobierno de Uribe– lo hace más vulnerable. La crisis ha puesto en evidencia precisamente la alta dependencia del ciclo colombiano frente a los movimientos de la economía mundial. El crecimiento de los años inmediatamente anteriores (2002-2007) tiene una mayor explicación en la coyuntura externa favorable que en las propias bondades de la política gubernamental.

Los flujos de capitales especulativos, el crecimiento importante de la inversión extranjera, el aumento de las remesas, los mejores precios del petróleo, de algunas materias primas de exportación (sobre todo minerales) y del café, se constituyeron en factores que explicaron en buena medida la fase expansiva del ciclo colombiano. Así mismo, debe considerarse la masiva incorporación de recursos de economías ilegales (del narcotráfico y del paramilitarismo). La “desmovilización” de algunos grupos paramilitares y de sus jefes mafiosos estuvo asociada a un verdadero festín del lavado de dineros, que se vio estimulado adicionalmente por las políticas gubernamentales.

La mayoría de esos factores (con excepción del café) inciden actualmente en sentido contrario; otros, tienen un comportamiento errático e inestable. Como consecuencia de ello, en 2009 se ha deteriorado sensiblemente el sector externo de la economía. Las proyecciones para 2010 no parecen mostrar, por lo pronto, una mejoría. Veamos de manera más detallada algunos rasgos del comportamiento reciente del sector externo, y de la economía en general.

Caída del comercio exterior

Primero, la fuerte contracción de los mercados internacionales, particularmente del mercado de los Estados Unidos, principal socio comercial de Colombia, ha provocado un descenso de los ingresos por concepto de exportaciones y forzado la reducción de las importaciones para enfrentar presiones a la balanza comercial. El gobierno ha proyectado para 2009 un déficit en la balanza comercial de 2.600 millones de dólares²⁷.

Pese a la sostenida revaluación del peso colombiano hasta el primer semestre de 2008, las exportaciones habían logrado aumentos importantes debido a los mejores precios en los mercados internacionales, particular-

27. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, *Marco fiscal...*, ob. cit.

mente del petróleo, el carbón, el ferroníquel y el café, así como por un aumento de las cantidades exportadas. Según el Banco de la República, al finalizar el año 2008, el total de bienes exportados ascendió a 37.095 millones de dólares, al tiempo que el total de las importaciones alcanzó 36.313 millones de dólares. Contrario al comportamiento de 2008, durante el primer semestre de 2009, las exportaciones cayeron 18.8 por ciento, al exportarse 15.481 millones de dólares frente a 19.062 millones del mismo período del año anterior. El descenso más significativo provino del mercado estadounidense con una caída de 24.8 por ciento. La Unión Europea redujo sus importaciones en 10.9 por ciento y Ecuador en 14.4 por ciento. El comportamiento del mercado venezolano, segundo socio comercial de Colombia, evitó una caída más fuerte de las exportaciones, pues apenas se redujo en 0.2 por ciento²⁸. Las importaciones por su parte se redujeron en 17.7 por ciento.

Todo parece indicar que la tendencia a la caída del comercio exterior se mantendrá durante el segundo semestre de este año y que ésta será más fuerte que las estimaciones oficiales de inicio de año que indicaban una reducción de las exportaciones para todo 2009 entre 14 y 16 por ciento. Los efectos sobre el aparato productivo son indiscutibles y conllevan en general un mayor desmejoramiento de la actividad económica y de la situación de empleo.

En un principio, se consideró que el deterioro de la capacidad exportadora podría ser compensado parcialmente con la devaluación del peso. Durante el último trimestre de 2008 y el primer trimestre de 2009, cuando el precio del dólar superó los 2.500 pesos, la tendencia devaluacionista alcanzó 34 por ciento. No obstante, a dicha devaluación le siguió un proceso de revaluación durante el segundo trimestre de 2009, el cual hizo decrecer el precio del dólar a un promedio de 2.000 pesos²⁹. Si se toma como referencia el primer semestre de 2008, durante el último año se ha presentado una devaluación promedio de la moneda de 26.4 por ciento,

28. El deterioro de la actividad exportadora se expresa igualmente en el hecho de que con 1.5 por ciento menos de cantidades exportadas, se recibieron 18.8 menos de ingresos, debido a la caída de los precios internacionales. Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con base en datos DANE-DIAN, www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/estadisticas/

29. Ese cambio de tendencia se explicó principalmente por la afluencia de dólares que provocó el mayor endeudamiento del Estado y la emisión de bonos de algunas empresas públicas.

según el Banco de la República³⁰. Su impacto favorable sobre la situación del sector externo ha sido en todo caso menor, dada la tendencia revaloracionista reciente.

La devaluación del peso motivó medidas de salvaguarda a 1.346 posiciones arancelarias de productos colombianos por parte del gobierno de Ecuador (luego se levantarían las restricciones a 680 de ellos de poco registro en el comercio binacional). Dicho gobierno argumentó una desprotección de su propia economía ante la imposibilidad de reaccionar con medidas cambiarias que compensasen las ventajas obtenidas por las empresas colombianas con la devaluación. Las medidas ecuatorianas, en buena medida avaladas por la Comunidad Andina de Naciones, luego de requerimientos del gobierno colombiano en contrario, afectan el 38 por ciento del total de las exportaciones a ese país y hacen prever que durante 2009 la caída de la actividad exportadora estará por el orden del 24 por ciento, afectando particularmente las industria textil, de producción de tabaco, de alimentos y bebidas, de muebles, de fabricación de vehículos y otros tipos de transporte, con su consecuente impacto sobre el empleo en esas actividades.

A ello se agregan factores políticos que han contribuido adicionalmente al deterioro de la relación comercial. Se trata particularmente de los que resultan de la decisión del gobierno de Uribe de convertir el territorio colombiano en plataforma de la estrategia geopolítica y militar de Estados Unidos en América Latina, merced al *acuerdo de cooperación* que permite a la fuerza militar estadounidense el uso de siete bases militares colombianas diseminadas en el territorio nacional para operaciones contra *el narcotráfico y el terrorismo*.

En efecto, el gobierno de Venezuela reaccionó frente a tal decisión con medidas diplomáticas (de *congelamiento* de la relación) y económicas (de reducción sensible del comercio exterior). Estas últimas se refieren a la suspensión de acuerdos comerciales previos y de compras de diversos productos de la oferta industrial y agropecuaria de Colombia. Los industrias más afectadas son las de bienes de consumo (automotriz, bebidas y alimentos procesados, textiles, zapatos, entre otros). Particular mención merecen las exportaciones de carne y de leche. Por lo pronto todo indica que la relación comercial se deteriorará aún más, dados los anuncios sobre una próxima suspensión de compras de materias primas y de productos energéticos (gas) colombianos por parte de Venezuela.

30. Banco de la República, *Informe de la Junta Directiva al Congreso*, Bogotá, julio de 2009, p. 69.

La reducción del comercio con Venezuela afectará sin duda la situación de balanza comercial e incidirá sensiblemente sobre algunos sectores de la actividad económica, acentuando las tendencias críticas de la economía. En 2008, Colombia exportó a Venezuela 6.091 millones de dólares, mientras que importó 1.198 millones de dólares de ese país, es decir, tuvo una balanza favorable de 4.893 millones. Durante el primer semestre de 2009 la balanza con Venezuela superó los 2.400 millones de dólares.

Pese a las afirmaciones del gobierno, de sectores del empresariado colombiano y de sus gremios, que parecieran minimizar el impacto económico de las medidas venezolanas y ecuatorianas, no hay nada que indique una sustitución inmediata de los mercados que se han deteriorado o cerrado en Venezuela o Ecuador, segundo y tercer socios comerciales de Colombia, respectivamente. Las producciones que se exportan a esos países gozan de las ventajas de la complementariedad y de la cercanía geográfica que difícilmente pueden ser compensadas en un corto plazo.

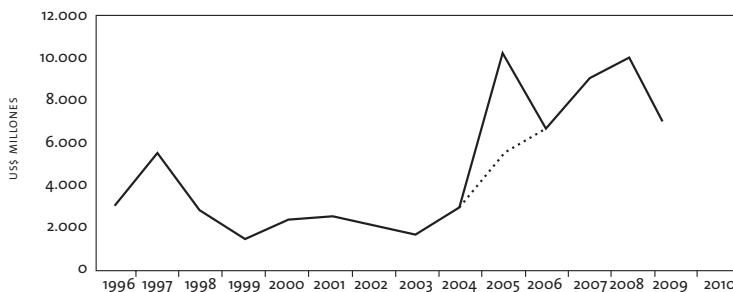
En suma, el comercio exterior registra una reducción significativa con efectos diferenciados de la tasa de cambio sobre su comportamiento y una tendencia al mayor descenso de esa actividad debido al deterioro de las relaciones con Ecuador y Venezuela. El comportamiento del mercado estadounidense y del mercado mundial en general no hace prever que haya una recuperación pronta en ese campo.

Descenso de la inversión extranjera

En segundo lugar, se ha apreciado una caída de la inversión extranjera, la cual se prolongará muy seguramente durante los próximos años. El gobierno de Uribe se ha preciado de tener en sus haberes el aumento de la inversión extranjera merced a una política de neoliberalización en esta materia que ha concedido incentivos extremos a los inversionistas³¹. Desde luego que tales incentivos se constituyeron en un factor que contribuyó a los mayores flujos de capital. Los aumentos en la inversión estuvieron asociados a la venta de empresas colombianas, pero también al despliegue de la inversión minera y energética, que se vio estimulada, además, por el comportamiento de la demanda mundial y, en especial, por los mejores precios de los llamados *commodities*.

31. Véase Jairo Estrada Álvarez, "Transnacionalización y nueva espacialidad capitalista. Elementos de economía política de la inversión extranjera en Colombia", *Revista Espacio Crítico*, n° 8, 2008.

Gráfico 2
Inversión extranjera directa en Colombia



Fuente: Banco de la República y proyecciones sobre inversión extranjera.

La crisis mundial modifica esa tendencia. A la saturación de la inversión extranjera para adquisiciones (dados los límites que representa la privatización o la venta de empresas privadas), se le adicionan ahora los efectos de la caída de la producción mundial y el comportamiento más bien errático de los precios de las materias primas y energéticos, que inciden sobre la tendencia de la inversión extranjera y acentúan las dificultades de las cuentas del sector externo³². El ministerio de Hacienda calcula que la inversión extranjera directa pasaría de 10.654 millones en 2008 a 7.127 millones de dólares en 2009. Como proporción del PIB, esta inversión descendería del 4.4 al 3,3 por ciento³³ (ver gráfica 2).

La tendencia del primer trimestre mostró una inversión a la baja. Según el Banco de la República, “entre enero y marzo de 2009 Colombia recibió 2.528 millones de dólares (5,0% del PIB) por concepto de inversión extranjera directa, monto inferior en 346 millones a lo observado un año atrás, cuando se recibieron 2.874 millones de dólares. Las principales actividades receptoras de los recursos del exterior fueron la industria petrolera (633 millones), minas y canteras (866 millones), la industria manufacturera (295 millones), el sector financiero (413 millones), el comercio (104 millones) y el sector de las telecomunicaciones (122 millones)”³⁴.

32. A la caída abrupta de los precios del petróleo y de las materias primas, le siguió una recuperación que los situó, en todo caso, en niveles inferiores a los registrados antes del inicio de la crisis. Debe recordarse que la especulación financiera había contribuido a elevar dichos precios en forma espectacular.

33. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, “Marco fiscal...”, ob. cit.

34. Banco de la República, *Informe de la Junta Directiva al Congreso*, Bogotá, julio de 2009, p. 81.

Reducción de las remesas

En tercer lugar, se ha observado una caída de los ingresos por concepto de remesas. Éstas se habían constituido durante el último lustro en una de las principales fuentes de financiamiento externo de la economía colombiana. Después de un comportamiento moderado hasta fines de la década de 1990, las remesas se incrementaron sistemáticamente de 1.578 millones en el año 2000 a 4.842,4 millones de dólares en 2008, año en el que alcanzaron su mayor nivel histórico. La crisis mundial ha impactado de manera fuerte sobre el empleo y el ingreso de los trabajadores inmigrantes, lo cual ha provocado que también en Colombia se vea venir una disminución de los ingresos por ese concepto, tal y como en el caso de México, Ecuador y algunos países centroamericanos. Según estimaciones, las remesas disminuirían entre 800 y 1.000 millones de dólares, esto es, en más del 20 por ciento respecto de 2008. De esa forma se colocarían en el nivel alcanzado hacia finales de 2006.

Deterioro de las balanzas

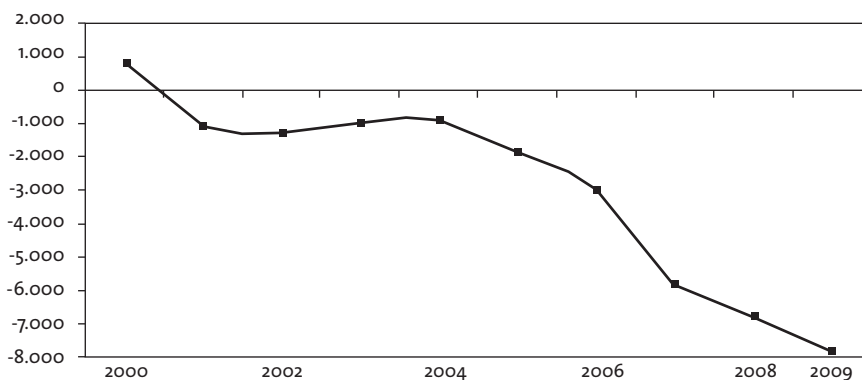
Dada la tendencia del comercio exterior y de las remesas y, en menor medida, de la inversión extranjera, se han acentuado, en cuarto lugar, las dificultades de balanza en cuenta corriente y de balanza de pagos. De hecho, Colombia ha venido registrando desde 2001 un déficit en cuenta corriente que se ha venido incrementando aceleradamente y en forma continua. En 2009, se estima que el déficit de la balanza en cuenta corriente será de 7.988 millones de dólares³⁵ (ver gráfica 3).

La persistencia de los problemas de balanza muy seguramente presionará las reservas internacionales y estimulará el endeudamiento externo. Diferentes análisis que se han hecho sobre el impacto de la crisis en América Latina –especialmente desde el campo de la tecnocracia neoliberal– han tratado de minimizarla señalando justamente que –en relación con la crisis de la primera mitad de la década de 1980–, el subcontinente tendría mejores condiciones para enfrentarla dado que cuenta con un volumen importante de reservas internacionales. Esa afirmación también se ha extendido al caso colombiano. Desde luego que un determinado nivel de reservas genera una suerte de colchón para neutralizar los impactos de una crisis. Pero ello depende no sólo del volumen de reservas, sino de la duración de la crisis. Si bien es cierto que el monto actual de reservas (23.739 millones

35. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, “Marco fiscal...”, ob. cit.

Gráfico 3 Balanza en cuenta corriente

(millones de dólares)



Fuente: Banco de la República.

de dólares³⁶) supera lo que técnicamente es convenido como un nivel adecuado, una prolongación de la crisis provocaría que se tuviera que recurrir a las reservas para enfrentar los problemas de balanza. ¿Hasta qué punto? Ello todavía no es predecible y depende del comportamiento de las variables que determinan el conjunto de la actividad económica externa. Lo que interesa, por lo pronto, es señalar que la crisis afectará tendencialmente las reservas internacionales y generará –como ya se ha dicho– condiciones para un agravamiento de la situación del sector externo. Para el caso colombiano, hay incluso sectores de la tecnocracia neoliberal que estiman que en 2009 los ingresos de divisas van a decrecer en por lo menos 10.000 millones de dólares. “El déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos se elevará y deberá financiarse con un excedente en la cuenta de capitales proveniente de créditos externos obtenidos por el gobierno, o por la caída de las reservas internacionales del Banco de la República”³⁷.

Cambios de comportamiento solamente se esperarían si variara la tendencia misma de la economía mundial, en general, de la economía estadounidense, en particular, y se diera un mejoramiento de las relaciones con Ecuador y Venezuela, todo lo cual es poco probable en lo inmediato. La mayoría de analistas discute por lo pronto acerca de si la economía ya

36. Banco de la República, *Informe al Congreso*, Bogotá, julio de 2009, p. 103.

37. Carlos Caballero Argáez, “Por fin despertó el gobierno”, Bogotá, *El Tiempo*, 28.03.2009.

tocó el punto más bajo y parece coincidir en que, una vez ello ocurra, puede venir un período de depresión y de lenta recuperación relativamente largo. Así es que todavía habrá mucho de qué hablar en relación con los impactos de la crisis sobre el sector externo y las reservas internacionales.

Mayor endeudamiento público

La crisis mundial viene generando, *en quinto lugar*, un incremento del endeudamiento público, en particular del endeudamiento externo (véase cuadro 1). Para compensar la caída en las fuentes de financiamiento externo, el gobierno de Uribe anunció al inicio de la crisis un aumento del endeudamiento en unos 6.000 millones de dólares, los cuales se destinarían para sostener la política de *seguridad democrática* y el financiamiento de la política social asistencialista del programa *Familias en acción*, clave dentro de los propósitos reeleccionistas del presidente. Según estudios especializados, se estima que al final de este año, la deuda alcanzará el 39 por ciento del producto interno bruto (PIB) y “seguirá ascendiendo hasta llegar 41,6 por ciento en 2011 (escenario moderado). Si la caída del crecimiento es más severa en 2009, y la economía se recupera más lentamente, la deuda aumentaría 10 puntos del PIB”³⁸. En 2010 se espera un endeudamiento adicional de 2.250 millones de dólares con recursos provenientes de organismos multilaterales y de 1.500 millones producto de la emisión de bonos³⁹.

Considerados el aumento de la deuda externa junto con la devaluación del peso (que, en todo caso, ha sido la tendencia predominante del último año, como quedó anotado), debe esperarse un mayor impacto sobre las finanzas del Estado. La deuda pública externa que había quedado relegada hasta mediados de 2008 a un segundo plano por efectos de la revaluación del peso, volverá a desplazarse hacia el centro del debate político del país (véase cuadro 1). ¿Con qué fuerza? Ello dependerá del comportamiento sucesivo de la tasa de cambio. Por lo pronto, el mayor endeudamiento se constituyó, junto con otros factores, en la explicación para contrarrestar la fuerte tendencia devaluacionista observada hasta fines de marzo de 2009. La sola devaluación –sin considerar los límites mismos del financiamiento externo y su eventual encarecimiento– habrá de afectar de manera sensible,

38. Ignacio Lozano, “Caracterización de la política fiscal en Colombia y análisis de su postura frente a la crisis internacional”, *Borradores de Economía*, n° 566, Banco de la República, Bogotá, mayo de 2009.

39. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, “Marco fiscal...”, ob. cit.

CUADRO 1

Deuda externa del Gobierno nacional central

SALDO DEUDA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

Millones de dólares y miles de millones de pesos

PERÍODO	DÓLARES	PESOS
2000	14.320,0	31.921,9
2001	18.220,0	41.745,3
2002	18.005,5	51.582,0
2003	20.639,5	57.340,9
2004	22.326,6	53.355,0
2005	20.832,1	47.585,0
2006	23.486,7	52.581,8
2007	23.658,7	47.666,5
2008	24.351,3	54.634,3

Fuente: Banco de la República

durante los próximos años, el costo del servicio de la deuda y, con ello, la situación fiscal en general.

Dada la importancia política de la experiencia colombiana, considerada por la derecha latinoamericana como un referente a seguir, entre otras cosas por su perseverancia en las políticas neoliberales, no fue casual la aprobación de un crédito BID por 1.200 millones de dólares durante la quincuagésima asamblea de esa entidad, celebrada en marzo de 2009. Según el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, el monto de los recursos “apunta a proyectos que deben tener como consecuencia la generación de empleo y el estímulo a la economía en un momento que la economía mundial está en recesión”⁴⁰.

Por otra parte, se formalizó la solicitud del gobierno colombiano al Fondo Monetario Internacional de un crédito por 10.400 millones de dólares, apelando a la nueva línea de crédito contingente de esta institución que

40. Revista *Semana*, Bogotá, D.C., 28 de marzo de 2009. Desde el año 2.000, Colombia ha recibido crédito BID por la suma de 7.000 millones dólares.

Se trata de las financiaciones más altas a países de América Latina.

fuera creada con los 1.2 billones de dólares aprobados por el G-20. Con dicho crédito contingente se espera enfrentar una eventual profundización de la crisis.

La respuesta del director del FMI, Dominique Strauss-Kahn a esta solicitud fue suficientemente ilustrativa: “Colombia tiene una trayectoria sostenida de políticas económicas apropiadas, así como fundamentos económicos y marcos institucionales muy sólidos. Las autoridades colombianas han respondido adecuadamente a los retos creados por la crisis financiera mundial y han demostrado estar comprometidas a continuar con esa firme trayectoria. Por lo tanto, es mi intención proceder rápidamente a solicitar al Directorio ejecutivo del FMI que apruebe la solicitud de Colombia de acceso a la línea de crédito flexible”. Como era de esperarse, la solicitud fue rápidamente aprobada.

Pese a que se asevera por parte del gobierno que esta línea de crédito FMI no trae consigo condicionamientos de política económica⁴¹, es evidente que la apelación a un recurso como este refuerza las actuales políticas neoliberales de gestión de la crisis. Un eventual protagonismo del FMI será aprovechado para consolidar la línea de reformas estructurales (aplazadas), que vienen demandando los sectores más ortodoxos de la tecnocracia neoliberal, como se verá más adelante. En ese sentido, la crisis y los efectos fiscales y cambiarios que ella genera serían utilizados para imponer una salida neoliberal, es decir, darle continuidad a las políticas que se han venido implantando durante las últimas décadas.

Desmejoramiento de las finanzas públicas

La crisis capitalista está deteriorando, *en sexto lugar*, las finanzas del Estado y acentuando los problemas fiscales. Se ha apreciado una importante reducción de los ingresos tributarios como consecuencia de la disminución de la actividad económica, del aumento de la desocupación y el deterioro de las condiciones de consumo. Todo ello incide sobre los impuestos que pagan los capitalistas y los trabajadores. A lo anterior debe adicionarse el hecho de que la política tributaria neoliberal se ha caracterizado por conceder grandes beneficios a los inversionistas, especialmente extranjeros, con un elevadísimo costo fiscal. El costo de las exenciones que se han

41. Entre tanto, tales condicionamientos no parecen necesarios pues la *institucionalización* de las políticas neoliberales implicó la imposición de prescripciones de política económica, que coinciden plenamente con los diseños del FMI. Así mismo persiste la influencia de la tecnocracia neoliberal que es dogmática en la defensa de los postulados de su política económica.

otorgado a las empresas y, en general, a quienes más tienen, para el año gravable 2008 ascendió a 7,39 billones de pesos, un 18,9 por ciento más que en el año gravable 2007, cuando el costo ascendió a 6,22 billones”⁴².

En presencia de un desmejoramiento de la situación fiscal ocasionado por menores ingresos tributarios y por un mayor servicio de la deuda, y dada la persistencia en un enfoque neoliberal de la política macroeconómica, debe esperarse que se acentúe la retórica a favor de la disciplina y la austeridad fiscal. El margen para políticas contracíclicas con cargo a recursos de presupuesto es más bien estrecho. Al respecto Fedesarrollo señala: “pese a que el gobierno ha asegurado su financiamiento para el 2009, y a que se ha logrado una mejora de los indicadores fiscales con respecto a comienzos de la presente década, el gobierno se ve forzado en momentos de recesión y no está en capacidad de impulsar un programa efectivo de reactivación económica. Eso se debe a que el Gobierno Nacional mantiene aún un déficit importante y una deuda pública muy por encima del promedio histórico de país”⁴³. Por ello, las afirmaciones del gobierno acerca de su política contracíclica son más bien retóricas.

También durante la crisis se continuará –seguramente con matices– con la austeridad fiscal selectiva hasta ahora imperante, que no ha escatimado el aumento de recursos para la financiación de la política de *seguridad democrática* y principalmente para la expansión del gasto militar.

De acuerdo con el balance fiscal del Gobierno Nacional Central, el déficit a financiar se ha venido incrementando como resultado de la crisis, pues mientras que en 2008 ascendió a 12,34 billones de pesos, en 2009 su monto se ubicó en 19.88 billones. En 2010, con proyecciones optimistas de crecimiento del PIB de 2.5 por ciento, el *hueco fiscal* está calculado en \$23,4 billones dados por una diferencia entre \$78,1 billones de ingresos totales y \$101,5 billones de gastos totales⁴⁴. Las proyecciones del gasto para 2010 muestran una reducción cercana a 2 por ciento en términos reales. La inversión pública caerá en términos nominales 18 por ciento, al tiempo que los pagos por intereses de la deuda crecerán 10.9 por ciento y las transferencias para pensiones lo harán en 15.2 por ciento⁴⁵. Los mayores gastos del

42. *Portafolio*, Bogotá, 23 de junio de 2009.

43. Fedesarrollo. “El anteproyecto del presupuesto: ¿A dónde fue el plan anticíclico?”, *Economía y política. Análisis de la coyuntura legislativa*, n° 51, Bogotá, mayo de 2009, p. 1.

44. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, “Marco fiscal...”, ob. cit.

45. *Ibíd.*

presupuesto total están concentrados en el servicio de la deuda, 27,3 por ciento, protección social, casi 20 por ciento, y defensa, 14,2, rubro que ya supera los gastos en educación, que ascienden al 13,9 por ciento⁴⁶.

Las cifras gubernamentales han pretendido minimizar el problema fiscal y relativizar los efectos de la crisis capitalista. La proyección del crecimiento del PIB en 2010 desestima las tendencias de la economía mundial y los mismos registros de la economía colombiana que, como se ha visto, tienden más bien a deteriorarse. Ello tiene como consecuencia que se infle el crecimiento de los ingresos y, en consecuencia, que se reduzca el monto del déficit. El equipo económico de Uribe ha optado por partirle el espinazo a la estadística, dado el período electoral que se avecina.

Lo cierto es que el hueco fiscal será más grande de lo que se afirma y demandará una financiación que descansa en principio sobre las siguientes fuentes posibles: una reforma tributaria estructural, que se ha venido ambientando en los medios de comunicación y en eventos especializados; o mayor endeudamiento; o ambas cosas a la vez, que es lo que parece ser más probable en el futuro. No debe descartarse la continuación de las privatizaciones. El ex ministro de Hacienda del primer gobierno de Uribe, Alberto Carrasquilla, propuso –por ejemplo– la venta de las acciones estatales en Ecopetrol para tapar el hueco fiscal. Kalmanovitz, a su vez, advirtió que esa enajenación resolvería las dificultades fiscales durante año y medio, mas no el problema estructural⁴⁷.

Deterioro de las condiciones de vida y de trabajo

Finalmente, la crisis siempre tiene efectos negativos sobre las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores y de la población en general. La caída de la actividad económica ha estimulado la tendencia a la mayor precarización del trabajo. Tal precarización resulta del aumento de la desocupación y del deterioro de los ingresos de los trabajadores, así como de la tendencia a una creciente informalización del trabajo, que en la actualidad viene siendo disfrazada en forma creciente con el mal llamado *autoempleo*, el cual se ha convertido en la principal fuente de generación de empleo en el país. Como es obvio, el aumento del desempleo se ha registrado particularmente en aquellas actividades económicas que han sentido de manera más inmediata los efectos de la crisis. Es notoria la caída

46. Salomón Kalmanovitz, “El presupuesto de 2010”, *El Espectador*, Bogotá, 2 de agosto de 2009.

47. Salomón Kalmanovitz, “De tributos justos”, *El Espectador*, Bogotá, 19 de julio de 2009.

del empleo industrial, en algunos servicios, en el comercio y la agricultura, entre otros.

La tasa de desempleo del trimestre marzo-mayo se ubicó en 11.9 por ciento para el total nacional y en 12.9 por ciento en las trece principales áreas metropolitanas, lo cual representó un incremento de 0.9 y 1.3 puntos, respectivamente, con relación al mismo período del año anterior⁴⁸. El incremento del desempleo no ha sido mayor debido al aumento del llamado empleo no asalariado que, en sentido estricto, corresponde a modalidades de empleo informal. Se trata de empleo precario, en todo caso.

Los análisis gubernamentales y del Banco de la República minimizan la situación del empleo en el país en la medida en que señalan que la tendencia de la desocupación está marcada por el aumento de la oferta laboral, más que por la incapacidad de la economía para generar nuevos empleos, lo cual se interpreta como un signo de mejoría en la situación económica general⁴⁹. Precisamente lo que se está apreciando es que cada vez más integrantes de las familias son empujados al mercado de trabajo como consecuencia de los impactos negativos que ha tenido la crisis sobre los ingresos familiares, estimulando *economías del rebusque* a través del llamado autoempleo⁵⁰.

La crisis no se ha acompañado de una tendencia a la mayor inflación. No parece por lo pronto reeditarse la experiencia de la estanflación que se apreciara en las economías capitalistas durante la crisis mundial 1974-1975. Dada la sobreproducción de la economía capitalista mundial, parecen predominar los factores depresivos de precios. En esa dirección han actuado las drásticas reducciones de la demanda mundial, de los precios del petróleo y de otras materias primas.

En el caso colombiano son evidentes las presiones deflacionarias, ocasionadas principalmente por la sobreproducción en algunas actividades y por la misma precarización del trabajo y el consecuente deterioro del nivel de ingresos. Así por ejemplo, la sensible reducción del ritmo de creci-

48. Banco de la República, *Informe...*, p. 49.

49. "El mayor desempleo se explica por un incremento de la oferta laboral (tasa global de participación) más rápido que la tasa de ocupación", Banco de la República, *Ibíd.*, p. 53.

50. Sin reconocerlo expresamente, como un resultado de la crisis, el Banco de la República explica el aumento de la oferta laboral a partir de dos factores: El primero, "relacionado con el efecto del trabajador adicional, el cual consiste en que agentes distintos al jefe de hogar realizan una entrada al mercado al ver reducidos sus ingresos corrientes. En algunas ciudades receptoras de remesas de trabajadores del exterior este efecto ha sido por el descenso de estos giros. La segunda tiene que ver con una ampliación de la oferta laboral, generada por un retorno de colombianos inmigrantes". Banco de la República, "Informe...", p. 48.

miento de los precios de los alimentos durante lo corrido de 2009 (1.15 por ciento a julio), respecto de lo acontecido en 2008 (13 por ciento durante todo el año), se explica por “la reducción de la demanda por pérdida de ingresos, que en el caso del sector alimentos se traduce en hambre y malnutrición al sustituirse bienes de la dieta básica por otros de menor riqueza nutricional”, así como por “los impactos que los bajos precios transmiten a los productores para inducirlos a menores siembras y producciones inferiores. Los derrames de leche, los valores de compra del arroz a escala de quiebra para la mayoría de los cultivadores, que perderán más de 500.000 pesos por hectárea, se traducirán en el mediano plazo en escasez”⁵¹. El comportamiento de la inflación le ha dado, por otra parte, un mayor margen a la política monetaria y ha posibilitado una reducción importante de la tasa de interés de intervención, como se verá más adelante.

Las políticas gubernamentales frente a la crisis y el continuismo neoliberal

La crisis capitalista mundial ha generado un debate mundial sobre la política económica que se impuso durante las últimas décadas. En particular, se han puesto en entredicho el capitalismo especulativo que produjo la regulación neoliberal y las políticas del Consenso de Washington. En la búsqueda de una salida capitalista de la crisis, los discursos posliberales que ya habían adquirido un cierto posicionamiento durante la última década se han fortalecido⁵². En el mismo sentido, se ha propiciado abiertamente un remozamiento del keynesianismo y se ha señalado que sus instrumentos de política representarían la mejor opción para evitar una profunda depresión y generar condiciones hacia la reactivación de la economía⁵³. Estas tesis encuentran su mejor expresión en las propuestas de un nuevo *New Deal* y de un nuevo *New Deal* verde⁵⁴. Lo cierto es, en todo

51. Aurelio Suárez Montoya, “Desempleo, deflación...”, ob. cit.

52. Sobre los discursos posliberales, véase Beatriz Stolorowicz, “El posliberalismo y la izquierda en América Latina”, en Estrada Álvarez, Jairo (compilador). *Teoría y acción política en el capitalismo actual*, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Departamento de Ciencia Política, Bogotá, D.C., 2006.

53. Sobre la reedición del keynesianismo, véase Walden Bello, Keynes. ¿Un hombre actual?, *Sin permiso*, Madrid, 19 de julio de 2009.

54. Sobre las estrategias de salida de la crisis véase, Institut fuer Gesellschaftsanalyse, “Die Krise des Finanzkapitalismus und die Herausforderung für die Linke”, Rosa Luxemburg Stiftung, Berlin, März, 2009, pp. 8-16

caso, que hasta ahora es poco el (neo)keynesianismo que se ha visto, si éste se entiende como un compromiso de clase para salir de la crisis; por el contrario, si el (neo)keynesianismo se define en términos de una técnica de regulación, algunas medidas anticrisis (de algunos países) han asumido esas características, sin constituirse en predominantes. Las operaciones de salvamento de entidades financieras o de multinacionales de la producción (hacia donde se han centrado los mayores esfuerzos del “nuevo intervencionismo” de Estado), definidas por algunos autores como medidas keynesianas, en sentido estricto no lo son. No se ha tratado de decisiones para estimular la demanda y el empleo (han generado incluso más desempleo, como el caso de los ajustes de la industria automotriz); se ha buscado más bien restablecer la *confianza* en el sistema.

En el caso colombiano, ese debate teórico y político ha estado prácticamente ausente hasta el momento⁵⁵. En el campo del pensamiento económico ortodoxo predominante (con sus diversas variantes) la discusión se ha centrado más bien en aspectos específicos de las medidas de política económica; no en una valoración del proyecto político económico en su conjunto. Ésta se ha eludido. Sectores importantes de la tecnocracia neoliberal que se impuso durante las últimas décadas buscan una nueva acomodación: ya no reivindican con la misma fe y vehemencia sus dogmas, y han tenido que volver a hablar de las *fallas del mercado*. Su mirada frente a la política gubernamental es incluso crítica en algunos aspectos⁵⁶.

La retórica gubernamental ha tenido la pretensión de pensamiento único. Ha evitado aparecer como neoliberal (tal y como ha ocurrido con los gobiernos de las últimas décadas); ha hecho esfuerzos por mostrarse como de naturaleza técnica, aunque las configuraciones recientes del régimen político hacen imposible ocultar sus vínculos con la política de la derecha y el clientelismo. Ello lo ha llevado a evidenciar una tendencia fuerte

55. Con la excepción de los análisis sobre la crisis de intelectuales marxistas como Renán Vega, Daniel Libreros, César Giraldo, Libardo Sarmiento, Nelson Fajardo y Aurelio Suárez; también, de algunas posturas *heterodoxas* en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional, como la de Ricardo Bonilla, o de Eduardo Sarmiento Palacio, de la Escuela Colombiana de Ingeniería.

56. Se trata entre otros de Rudolf Hommes, (Ministro de Hacienda del gobierno de César Gaviria (1990-1994) y asesor de Álvaro Uribe en los primeros años del primer mandato), Armando Montenegro (director de Planeación del gobierno de César Gaviria), Carlos Caballero Argáez (Ministro del gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y ex integrante de la Junta Directiva del Banco de la República), Juan Carlos Echeverry (Director de Planeación del gobierno de Andrés Pastrana), Salomón Kalmanovitz (ex integrante de la Junta Directiva del Banco de la República).

a la ideologización al conjugar las políticas del Consenso de Washington con la retórica de la *seguridad democrática*. La crisis se ha pretendido desligar de la política económica neoliberal imperante. En el caso colombiano pareciera como si no hubiera relación alguna entre crisis, neoliberalismo y proyecto político autoritario. Una buena expresión de ello son, precisamente, las políticas que se han anunciado para enfrentar la crisis.

En sentido estricto, ellas no representan ruptura alguna con las prácticas neoliberales imperantes durante las últimas décadas. Por una parte, se insiste en la necesaria continuidad del proceso de neoliberalización, como se desprende del hecho de que la gran aspiración del gobierno actual es la ratificación de los tratados de libre comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá por parte de los Congresos de esos países⁵⁷ y la firma de uno con la Unión Europea; así mismo, se persiste en políticas de estímulo a la inversión a través de diversos mecanismos e instrumentos (zonas francas uniempresariales, incentivos tributarios, convenios de estabilidad jurídica para las empresas) y en las políticas de privatización⁵⁸. Por otra parte, se mantiene el concepto de estabilidad macroeconómica (control inflacionario y austeridad fiscal) como eje de la política macroeconómica. Salvo algunas medidas puntuales de poca trascendencia, la crisis capitalista no ha provocado un cambio de rumbo de la política económica. La mayoría de políticas que se anunciaron contra la crisis ya hacían parte de la política gubernamental anterior a ella. Veamos.

De acuerdo con la retórica gubernamental, la *estrategia para enfrentar la crisis* contiene cuatro componentes⁵⁹:

1. Postura fiscal razonablemente anticíclica en condiciones de sostenibilidad de la deuda, con una priorización del gasto.
2. Aseguramiento del acceso a la financiación externa.
3. Garantía del financiamiento de la actividad productiva.
4. Protección del empleo y promoción de la competitividad.

57. En ambos casos, el trámite de ratificación de los tratados ha sufrido serios tropiezos (hasta su aplazamiento) debido a las objeciones a la situación de derechos humanos en el país, que preocupa a importantes sectores de los congresos y de la opinión pública de esos países.

58. Sobre el ambicioso programa de privatizaciones, véase Departamento Nacional de Planeación, "Inversión extranjera directa: Factor de desarrollo de la infraestructura colombiana", Bogotá, 6 de febrero de 2009.

59. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, "Impactos y oportunidades de la crisis", Bogotá, D.C., febrero 4 de 2009.

La política tributaria se mantiene dentro de la línea de la economía del lado de la oferta que considera que las reducciones impositivas o los incentivos tributarios al capital aumentan por sí solos los niveles de inversión y derivan en un aumento de ingresos del Estado. En ese sentido, la política del gobierno contempló como parte de una política anticíclica la reducción de la carga impositiva que impuso la reforma tributaria de 2006, la cual se estima para el año 2009 en 2.26 billones de pesos⁶⁰. A ello se suma el 40 por ciento de exención impositiva a los bienes de capital importados (que en años anteriores se vieron adicionalmente favorecidos por la revaluación del peso). En esa misma dirección se contempla la promoción de las llamadas zonas francas uniempresariales, en las que la tasa de imposición sobre las utilidades se encuentra 19 unidades por debajo de la tasa del 34 por ciento imperante en el país⁶¹. Tales componentes de la política tributaria son anteriores a la crisis; su aplicación, por tanto, no representa ninguna novedad.

Esta política tributaria posee un marcado sesgo de clase a favor del gran capital. Todos estos incentivos al capital tuvieron un costo fiscal de 5,7 billones de pesos en 2008, 1,2 del PIB y cerca del 6 por ciento del recaudo total, según Kalmanovitz. De acuerdo con el diario económico *Portafolio*, el costo de las exenciones que se otorgaron a las empresas y, en general, a quienes más tienen, ascendió en el año gravable 2008 a 7,39 billones de pesos, un 18,9 por ciento más que en el año gravable 2007, cuando el costo ascendió a 6,22 billones⁶².

Mientras se mantienen estos incentivos al capital, que algunos consideran un innecesario obsequio⁶³, el gobierno se ha negado a cualquier rebaja

60. Se trata de la reducciones de la tarifa nominal de impuesto de renta del 34 al 33 por ciento; del impuesto de timbre de 1 al 0,5 por ciento y del número de cuotas del impuesto al patrimonio de tres a dos cuotas.

61. Con el propósito de enfrentar la crisis en los departamentos más afectados por la captación ilegal de recursos (Cauca, Nariño, Huila, Caquetá y Putumayo) se redujo el requisito de inversión mínima de 38 a 1 millón de dólares y se fijó la obligación de crear al menos 50 empleos. Con esa medida, a juicio del Ministro de Comercio, estos “departamentos se convierten en un mejor destino para la inversión local, nacional y extranjera al gozar de mayores beneficios”.

62. Salomón Kalmanovitz, “Una política fiscal recesiva”, *El Espectador*, Bogotá, 22 de marzo de 2009; *Portafolio*, 23 de junio de 2009.

63. Tecnócratas neoliberales se oponen ahora a esos incentivos pues los consideran un regalo del gobierno y señalan que antes que de incentivos, la acumulación de capital depende más bien del ciclo económico, de las expectativas de largo plazo y de otras variables fundamentales.

Armando Montenegro, “Exenciones en recesión”, *El Espectador*, 17 de abril de 2009.

impositiva que pudiera incentivar el consumo, por ejemplo, una reducción del impuesto al valor agregado o del precio de la gasolina. Este último aspecto es particularmente ilustrativo: luego de haberse propiciado una política de fijación (nivelación) del precio interno de la gasolina de acuerdo con el precio internacional (lo cual provocó una subida espectacular del mismo, dados los aumentos del precio del petróleo), el gobierno se ha negado a reducir el precio después de la caída de los precios de este combustible⁶⁴. Con esta decisión se ha estado en presencia de una reforma tributaria velada, pues el costo para los consumidores ha sido estimado en 2.6 billones de pesos en 2009. Por otra parte, se ha anunciado, además, la presentación de un proyecto de reforma, que incrementaría los impuestos territoriales.

Como se aprecia, la política de tributación es regresiva, acentúa las tendencias recesivas y busca descargar el peso de la crisis sobre sectores medios y populares. En sentido estricto, no se puede considerar contracíclica. El deterioro de la situación fiscal ha conducido a la formulación de propuestas de reforma tributaria estructural que, por sus lineamientos, tienen la pretensión de profundizar las políticas neoliberales imperantes.

La política de gasto público, aunque –según se afirma– tendría propósitos contracíclicos, no representa novedad respecto de lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, que fue diseñado con anterioridad a la crisis. En puridad, no hay disposición adicional de recursos o decisión política para expandir el gasto con miras a contrarrestar los efectos de la crisis. El pomposo anuncio de un plan anticrisis, el llamado *Plan de choque*, de 55 billones de pesos fue rápidamente desvirtuado. Se demostró que ese era el costo de obras previstas en el Plan Nacional de Desarrollo (2006-2010), la mayoría de ellas sin iniciar y a ejecutarse con financiación del sector privado. Del total de esos recursos, 32 billones de pesos corresponden a un –nada realista– estimativo de inversiones del sector privado. De los 23 billones que quedan, 13 billones son inversiones de Ecopetrol (que entre tanto es una sociedad por acciones), 4 billones provienen de gastos de gobiernos locales y solamente 6 billones corresponden a gastos del gobierno central.

La retórica gubernamental afirma actualmente que la política de gasto tendría dos componentes principales: las obras de infraestructura y las

64. Mientras que en Bogotá, en abril de 2009, el precio de un galón de gasolina era de 7.473 pesos (3.13 dólares), en Estados Unidos ese mismo galón valía 4.491 pesos (2.09 dólares). El salario mínimo en Estados Unidos es 7.5 veces más que en Colombia. La realización de un paro de transportadores obligó al gobierno a reducir el precio del galón de gasolina en 400 pesos.

transferencias al sector privado. En el primer caso, se trataría de la inversión directa del gobierno central, de la inversión de los gobiernos locales (departamentos y municipios) y de las concesiones viales. En el segundo, se trataría de los programas de apoyo social (principalmente *Familias en acción*) y de los programas de apoyo productivo.

Por inversión directa del gobierno central se comprenden las inversiones en vías, programas de vivienda, agua potable y saneamiento básico, así como distritos de riego, estimadas en 5.7 billones de pesos. Las inversiones departamentales contemplan gastos en vías (0.5 billones de pesos) y en planes departamentales de agua, por el orden de 2,27 billones de pesos. Las concesiones, por su parte, incluyen los sistemas integrados de transporte masivo, las inversiones en puertos (Buenaventura, Barranquilla y Santa Marta, y los privados de Contecer y Aguadulce), así como los aeropuertos (El Dorado, San Andrés y Medellín, Rionegro, Carepa, Quibdó, Corozal y Montería). Respecto de transferencias al sector privado, en materia de programas sociales (*Familias en acción*, *Adulto mayor* y *Desplazados, pobreza y población vulnerable*) se estiman recursos por 3.1 billones de pesos, de los cuales 1.8 billones corresponden al programa *Familias en acción*, que tiene un incremento de 87 por ciento respecto de 2008. En el caso de los programas de apoyo productivo (Proyectos productivos, apoyo a Mipymes y Créditos y asistencia técnica) se han previsto 0.63 billones de pesos.

Con estas medidas el gobierno ha señalado que se estaría en presencia de una política fiscal razonablemente anticíclica, que no pondría en riesgo los objetivos fiscales de mediano plazo y que ayudaría a conservar la confianza en la economía⁶⁵.

Como ya se dijo, todas estas medidas de política estaban incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo y presupuestadas con esas asignaciones. La crisis no ha puesto nada adicional hasta el momento. Incluso, como se ha señalado por parte de algunos analistas, la política fiscal ha sido más bien recesiva. En especial, por cuanto ha presionado al superávit de los gobiernos locales para financiar el déficit del gobierno central. En 2008, por ejemplo, el superávit de los gobiernos locales alcanzó el 2.4 por ciento del PIB. Si se estima que el gasto de los gobiernos locales corresponde al 10 por ciento del PIB, eso quiere decir que tales gobiernos fueron obligados a

65. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Impactos y..., ob. cit.

recortar la cuarta parte de sus gastos⁶⁶. De paso, se pone en evidencia parte del rediseño del proceso de descentralización, organizado en función del proyecto autoritario de la *seguridad democrática* de la derecha colombiana.

Los efectos de tal política son profundamente perversos, si se considera que buena parte de los gastos locales se destinan para gasto social, y que además con su recorte se acentúa la tendencia a la caída de la actividad económica. De ahí las demandas por mayor gasto local y los requerimientos en ese sentido hechos por el mismo gobierno, ahora que se ha agravado la crisis. Como se observa, no se puede afirmar que en el caso colombiano se hayan emprendido –en sentido estricto– medidas de política fiscal anticíclica. La retórica de la austeridad fiscal (selectiva) se mantiene.

En cuanto al segundo componente de la estrategia para enfrentar la crisis, el acceso a la financiación externa, se ha considerado que se trata de garantizar el flujo de recursos de crédito para que el país tenga, en presencia de recursos externos escasos, la suficiente disponibilidad para financiar sus programas. Se busca entonces una salida a partir del mayor endeudamiento externo. Para 2009 se estima un endeudamiento con la banca multilateral de 2.400 millones de dólares y la colocación de bonos de deuda (Bono Global) por 1.000 millones de dólares. Los créditos provendrían del BID, la CAF y del FMI. Estos últimos ya fueron aprobados por un monto de 10.400 millones de dólares, como ya se anotó. Este endeudamiento de contingencia fue propuesto en su momento por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y recomendado por *think tanks* del establecimiento, como Fedesarrollo, e instituciones con poca credibilidad internacional en la actualidad, como el Citigroup, Goldman Sachs y UBS, que aseveraron que Colombia sería un buen candidato para acceder a créditos del FMI, debido a su situación externa relativamente sostenible, sus políticas monetarias y cambiarias sanas y a la no presencia de problemas de solvencia en su sistema financiero.

El tercer componente de la estrategia anticrisis, el financiamiento de la actividad productiva, se fundamenta igualmente en la financiación externa (Crédito BID-Bancoldex por 650 millones de dólares para el período (2008-2011); línea CAF-Bancoldex por 300 millones de dólares), así como recursos para apalancar créditos a pequeñas y medianas empresas por 0,5 billones de pesos. Así mismo, se pretende estimular dicha actividad a través de la política monetaria, con la reducción del encaje y de la tasa de interés de intervención.

66. Salomón Kalmanovitz, “Una política fiscal...”, ob. cit.

De acuerdo con la concepción gubernamental, el incremento del endeudamiento externo no tendría efectos significativos al considerar la estructura actual de la deuda pública: 75 por ciento del total reposa en el mercado interno y el restante en el exterior (véase la estructura reciente en el cuadro 2). Frente a la deuda interna se ha optado por una política que busca “alargar” su perfil y diferir los pagos. Los bonos de deuda pública TES con vencimientos en 2009, 2010 y 2011 se trasladaron a 2012, 2014 y 2018 (3.7 billones de pesos).

En presencia de un creciente déficit en cuenta corriente, así como de ingresos del Estado deprimidos por la crisis, el gobierno tendrá que recurrir a un mayor endeudamiento. La mayor disponibilidad de recursos puede prolongar, en efecto, las condiciones del consumo público y, con ello, amilantar transitoriamente el impacto de la crisis. La mayor o menor incidencia de un mayor nivel de deuda dependerá en buena medida de la duración de la crisis y del comportamiento de la tasa de cambio. Si nos atenemos a los análisis predominantes hasta el momento, esta crisis capitalista puede estar acompañada de una larga depresión y de una tendencia devaluacionista (errática) de la moneda, lo cual –para el caso de países como Colombia– implicará un deterioro de la situación de la deuda, en general, y de la deuda externa en particular, tal como ya se analizó en otro aparte de este texto.

Respecto del cuarto componente de la estrategia, los anuncios gubernamentales se han caracterizado por la vaguedad y la ausencia de compromisos explícitos, al afirmarse que la protección del empleo sería un compromiso que involucra al gobierno nacional (a través del Ministerio de la Protección Social), a los gobiernos locales, a las cajas de compensación y a los gremios y los sindicatos, y comprendería programas de capacitación y reentrenamiento, información e intermediación laboral, así como el fortalecimiento del vínculo entre la educación media y los programas del Sena (Servicio Nacional de Aprendizaje). Como se aprecia, la apuesta gubernamental frente a la crisis consiste en políticas activas frente al mercado de trabajo; más no hay la decisión política de impulsar planes gubernamentales de generación de empleo, financiados con cargo a recursos de presupuesto. Se trata de una retórica plagada de rutinarios y demagógicos anuncios. En ese sentido, es evidente que no existe la voluntad política para contener la mayor desocupación y precarización del trabajo que está provocando la crisis. Desde el punto de vista social, el gobierno de Uribe considera que con el aumento de la cobertura del programa *Familias en*

CUADRO 2

Deuda externa del Gobierno Nacional Central

SALDO DEUDA TOTAL / Miles de millones de pesos

AÑO	SALDO DEUDA TOTAL	SALDO DEUDA INTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO	SALDO DEUDA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
2000	64.543,2	32.621,3	31.921,9
2001	83.264,2	41.518,9	41.745,3
2002	102.379,7	50.797,7	51.582,0
2003	115.913,6	58.572,7	57.340,9
2004	119.678,4	66.323,3	53.355,0
2005	132.880,4	85.295,4	47.585,0
2006	143.992,1	91.410,3	52.581,8
2007	141.991,2	94.324,7	47.666,5
2008	159.660,3	105.026,0	54.634,3

Fuente: Banco de la República.

acción y la bancarización de los beneficiarios se habrá cumplido la tarea del Estado en esa materia.

Además de la estrategia aquí descrita, se ha tomado otra serie de medidas que se ha concebido como parte del paquete anticrisis del gobierno de Uribe. Se trata de decisiones que más bien han buscado un impacto mediático, pero sobre cuya incidencia se tienen dudas. Con ellas se busca estimular la demanda mediante el endeudamiento individual. De esa forma, se señala, se protegería el empleo y se contribuiría a salvar la industria. En ese sentido, se abrió una línea de crédito por 500.000 millones de pesos para estimular la compra de vehículos y de electrodomésticos nacionales (el gobierno asume el costo de plazos más largos y de tasas de interés más bajas); así mismo, se anunció subsidiar la compra de vivienda (entre 3 y 5 puntos porcentuales)⁶⁷.

67. Estos créditos tienen unos condicionamientos. Por ejemplo, el beneficio se pierde si hay mora en el pago de tres meses consecutivos durante los primeros siete años. A principios de julio de 2009, se habían concedido 8.300 créditos con subsidio efectivo, mientras que otros 19.000 créditos aprobados, pero no desembolsados, podrían acogerse a la medida. La aspiración del

La eficacia de estas medidas ha sido ampliamente cuestionada, pues se considera que en condiciones de crisis, de precarización del trabajo y de incertidumbre sobre el futuro es poco probable que los trabajadores opten por un mayor endeudamiento. Sus efectos son parciales y localizados apenas en algunos segmentos minoritarios de la población.

Junto con las medidas de política económica gubernamental hasta aquí expuestas, deben considerarse las decisiones del Banco de la República. Luego de haber privilegiado una política de control inflacionario sobre el crecimiento y la generación de empleo, considerada por especialistas como uno de los factores internos generadores de la crisis, el Banco optó por el *aflojamiento* de la política monetaria. En efecto, la tasa de interés de intervención que, en noviembre de 2008, se ubicaba en 10 por ciento se redujo paulatinamente 550 puntos básicos hasta alcanzar el nivel de 4.5 por ciento a final de junio de 2009⁶⁸; así mismo, se eliminó el encaje marginal y se redujo el encaje bancario.

Tal giro en la política ortodoxa del Banco fue posible por las presiones deflacionistas que han acompañado a la crisis, las cuales le han dado un margen a la política monetaria para bajar las tasas de interés a la espera de estimular por esa vía la inversión y el endeudamiento. El mercado no ha respondido en la misma proporción en la que el banco ha reducido su tasa de intervención. El negocio financiero sigue beneficiándose de las elevadas tasas reales de interés, tal y como lo muestra el crecimiento de sus utilidades.

Debe considerarse, en todo caso, que un eventual abaratamiento del dinero es un factor que incide sobre las decisiones de inversión de los empresarios capitalistas, aunque en condiciones de crisis no sea el fundamental. Las preocupaciones principales se trasladan a la demanda y a los escenarios de producción. Mientras no haya expectativas sobre un mejoramiento en la tasa de ganancia, no se debe esperar un aumento importante de la inversión.

Por otra parte, la crisis capitalista no ha tenido una mayor dimensión en Colombia por cuanto la economía se ha montado sobre una burbuja especulativa que artificiosamente contrarresta la caída general de la actividad

gobierno –para mover el mercado de vivienda– es ampliar la cobertura, para lo cual anunció que el Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria (Frech), sumaría \$840.000 millones y completaría 80.000 nuevas ofertas. *Portafolio*, 17 de julio de 2009.

68. Banco de la República, *Informe...*, op. cit., p. 54.

económica. Sin tratarse de una política explícitamente formulada, lo cierto es que, mientras la actividad productiva y comercial está deprimida, algunas empresas importantes vinculadas a esa actividad han visto incrementar sus valores en bolsa en forma relativamente rápida, como ya se consignó en otro aparte de este trabajo. Así mismo, cuando la devaluación presionaba con fuerza la tasa de cambio, la colocación de títulos de empresas estatales, o con participación accionaria del Estado, revirtió ese comportamiento y generó ganancias especulativas.

Suárez Montoya describe muy bien esta tendencia especulativa y sus efectos: “El ingreso masivo de capitales, que destruye empleo y exportaciones casi al mismo ritmo que lo hace la diplomacia de Uribe, tiene como objeto la creación de la burbuja accionaria que se ha creado, inflada con base en el mercado de títulos de empresas oficiales como ETB, Ecopetrol, ISA e Isagen.

Es fácil inducir que se traen dólares, que están devengando tasas reales de interés negativas en los mercados financieros externos, y se aplican a la especulación en productos de renta variable, motivada especialmente por los valores de dichas firmas estatales cuyas subastas se están ensamblando. Ese movimiento en manada, unido a las inversiones en minería e hidrocarburos, establece muy difíciles circunstancias para crear un círculo virtuoso que sí logre rescatar de verdad la industria, el agro, la economía y el trabajo nacionales”⁶⁹.

Como se ha podido apreciar, la experiencia colombiana de gestión de la crisis no ha producido ruptura alguna con los cánones de la política económica neoliberal hasta ahora imperante. Por lo pronto se aprecia más bien una línea de continuidad y no debe esperarse que ella se interrumpa, a no ser que una eventual profundización de la crisis y sus impactos forzara a ello. Por otra parte, resulta poco probable que una tecnocracia que se ha formado y cultivado en el pensamiento ortodoxo, y que ocupa las posiciones claves de la dirección política del proceso económico, vaya a producir un giro en la política económica. Por ello, su insistencia más bien en políticas de oferta que recuerdan las políticas reaganianas para enfrentar la crisis 1980-1983.

La crisis no necesariamente representa la posibilidad de activar políticas de demanda. Cuando ello ocurrió, como el caso de la Gran Depresión, se presentó como parte de una respuesta política a la revolución bolchevique

69. Suárez Montoya, Aurelio, “Desempleo, deflación...”, ob. cit.

en el contexto de una salida capitalista de restauración (keynesiana) del poder de clase (dominante)⁷⁰. En la experiencia de la crisis actual, no son descartables las salidas hacia una reafirmación neoliberal. No es casual que en la experiencia colombiana se esté abogando –en plena crisis– por un nuevo ciclo de reformas estructurales aplazadas o que merecen ajuste.

Usos capitalistas de la crisis: ¿Hacia un nuevo ciclo de reformas neoliberales?

Toda crisis tiene la función de restablecer el equilibrio roto y de generar nuevas condiciones para una nueva fase de acumulación del capital. La crisis produce una profunda reorganización de la producción y de la propiedad. Así como hay sectores capitalistas que se ven severamente afectados, otros se ven favorecidos. La crisis genera igualmente una redefinición de las relaciones entre el capital y el trabajo. Las características que ésta asuma dependen en gran medida del grado de organización, así como de la capacidad de respuesta por parte de los trabajadores. Así como pueden estar en juego salidas democráticas o revolucionarias de una crisis, igualmente es posible una continuidad de las políticas imperantes, e incluso una profundización.

En el caso colombiano, esta última parece ser por lo pronto la tendencia predominante. La crisis está siendo usada para abonar el terreno de un nuevo ciclo de reformas neoliberales estructurales que deben dar continuidad a las políticas que se han venido aplicando durante las últimas décadas. Por lo pronto se aprecia una avanzada intelectual y política proveniente de los sectores más representativos de la tecnocracia colombiana que, en diversos estudios y pronunciamientos en eventos empresariales y columnas de opinión, viene proponiendo lo que bien puede llamarse un nuevo paquete de reformas estructurales.

Aunque desde el punto de vista político no hay condiciones para impulsar de manera inmediata dicho paquete, dado el proceso electoral que se avecina (elecciones presidenciales y parlamentarias en 2010), la crisis se torna útil en la medida en que las reformas propuestas terminan presentándose (y constituyéndose) en una condición para iniciar una nueva senda de crecimiento estable y duradera. De esa forma, se pretende una prescripción de los lineamientos de la política económica, independientemente de los proyectos políticos que han de acompañar la salida de la

70. Antonio Negri, "John Maynard Keynes y la teoría del Estado en el 29", en *Revista Hojas Económicas*, n^{os} 6 y 7, Universidad Central, Bogotá, 1996.

crisis. La crisis es usada para imponer una agenda de políticas estructurales (neoliberales).

En lo esencial se trata de dar continuidad al largo proceso de redistribución regresiva del ingreso a favor de los fondos de acumulación, en desmejora de los fondos de consumo de la población. Alberto Carrasquilla sintetiza con mucha claridad esta aspiración: “Una política pública dirigida terca y monóticamente a crear las condiciones para que el sector privado produzca crecimiento y pague impuestos, basta como fuente para financiar en grande nuestro progreso”⁷¹. La nueva fase capitalista debe caracterizarse por una profundización de las políticas de oferta. Todo lo que represente obstáculos a la acumulación de capital afecta las condiciones del crecimiento y con ello la posibilidad del *derrame* sobre el conjunto de la sociedad.

Dos son los argumentos liberales (ofertistas) que se vienen presentando con mucha fuerza en el debate. En primer lugar, no sólo persistirían sino que se habrían creado nuevos factores que elevan el costo de reproducción de la fuerza de trabajo. En segundo lugar, no sólo el nivel de tributación sería muy bajo, sino que sus configuraciones terminarían afectando a los que tienen la capacidad de producir riqueza.

Como respuesta a ello, lo conducente sería una profundización del proceso de *neoliberalización* a través, por una parte, de la reducción de los costos laborales, específicamente los correspondientes al llamado impuesto de nómina, y la reformulación de la financiación de la protección social, particularmente en salud y pensiones, y, por la otra, de una política de tributación que, ampliando la base tributaria y aumentando las tasas de los impuestos indirectos, posibilitase un mayor recaudo, al acompañarse de una mayor reducción de los impuestos al capital. Tal reducción se constituiría en incentivo para producir y aumentaría *de facto* la magnitud gravable. En igual sentido, se esperaría una política tributaria territorial que generase más recursos para la financiación de las competencias a cargo de los gobiernos locales.

Los sectores más ortodoxos de la tecnocracia están presionando una política de mayor flexibilización laboral y de precarización del trabajo. La salida a la crisis la comprenden en ese sentido en términos de una profundización de la *neoliberalización del trabajo*. Con fundamento en un enfoque ofertista, se propone estimular la inversión y, con ello, el empleo, mediante la reducción de los costos de la ocupación (el argumento ha

71. Alberto Carrasquilla, “Una fábula y seis moralejas”, *El Espectador*, 27 de junio de 2009.

estado presente, por cierto, durante dos décadas de políticas laborales y ha servido de sustento para las dos reformas neoliberales en esa materia, la Ley 50 de 1990 y la Ley 789 de 2002). Específicamente se trata de eliminar el salario mínimo legal para que éste sea determinado más bien por el mercado (el salario mínimo legal en Colombia “es un chiste escandalosamente alto”, ha dicho Alberto Carrasquilla, ex ministro de Hacienda del primer gobierno de Uribe), y de suprimir contribuciones patronales (los aportes parafiscales), que tienen actualmente un costo equivalente al 9 por ciento del valor de la nómina. Lo que actualmente se financia con dichas contribuciones, modalidades de gasto social (Sena, Cajas de compensación familiar, Bienestar Familiar), pasaría a financiarse con tributación general⁷².

Las propuestas de la tecnocracia neoliberal advierten que la financiación de la protección social terminó siendo asumida en buena medida por el sector formal de la economía (régimen contributivo). “Como está planteada la financiación del esquema de protección social, el sistema no es sostenible, dado que se financian servicios sociales prestados por el Estado a través de cargas a la nómina, generando un círculo vicioso en el que se restringe el crecimiento del empleo formal y se le exigen cada vez más aportes a los trabajadores que se encuentren en él”⁷³. De ello se derivan propuestas de financiación de la seguridad social en salud (régimen subsidiado) con base en un impuesto general. En materia pensional se han formulado propuestas para hacer sostenible financieramente el sistema, desregulando las definiciones legales sobre edad de jubilación y sobre monto mínimo de pensión⁷⁴. De esa forma se resolverían problemas de cobertura y neutralizarían presiones fiscales y obligaciones legales en materia pensional que imponen el salario mínimo legal como piso.

Las políticas de neoliberalización del mundo del trabajo tienen consecuencias fiscales. Lo que esencialmente se está buscando es que aspectos de la política que hoy son financiados por el capital (y cofinanciados en menor medida por los trabajadores), pasen a ser financiados por la sociedad en su conjunto a través de impuestos generales, que no pueden ser otros que impuestos indirectos. Así es que la salida de la crisis se está

72. Véase la entrevista con el director de Fedesarrollo, Roberto Steiner, “Sustituir el actual salario mínimo por uno ‘flexible’”, *Portafolio*, Bogotá, 5 de abril de 2009.

73. Fedesarrollo. “El sistema pensional y el mercado laboral: dos manifestaciones de un mismo problema”, *Tendencia económica*, n° 85, Bogotá, mayo de 2009, p. 15

74. *Ibíd.*

perfilando acompañada de una reforma tributaria que consolide la estructura de tributación que ha venido imponiendo la política neoliberal durante las últimas décadas: menos impuestos al capital, más impuestos a la población trabajadora en general⁷⁵.

En el primer caso se trata de la implantación de un régimen de incentivos extremos al capital que se ha profundizado durante los dos gobiernos de Uribe Vélez, el cual se ha caracterizado, por una parte, por una reducción de las tasas de imposición a las utilidades, al tiempo que se ha ampliado la base gravable de las rentas del trabajo y del patrimonio, vinculando de manera creciente a las capas medias y a sectores de la población trabajadora, y, por la otra, por la creación una diversidad de exenciones, cuyo costo fiscal es creciente y presiona la búsqueda de otras fuentes compensatorias de financiación. Se trata, entre otros, de los incentivos tributarios en zonas francas uniempresariales, que incluyen –como ya se dijo en otra parte de este texto– una reducción del impuesto a las utilidades del 34 al 15 por ciento y de un 40 por ciento a las importaciones de maquinaria, así como de las exenciones a los cultivos de larga duración (palma africana y otros, destinados a la producción de agrocombustibles) y a la construcción hotelera. Todos estos incentivos se han acompañado, además, de protecciones sin precedentes a la inversión a través de los contratos de estabilidad jurídica (Lay 963 de 2005). Tales contratos impiden cambios en las reglas de juego por períodos de hasta veinte años⁷⁶.

En el segundo caso se trata de una muy probable ampliación de la base gravable del impuesto al valor agregado mediante la eliminación de

75. De acuerdo con las cifras de un reciente estudio de la CEPAL, habría que reestructurar la carga tributaria. Mientras que ésta representa en Colombia el 15,8 por ciento del PIB, en países del mismo desarrollo económico relativo es superior. Brasil, por ejemplo, tendría 36,2 por ciento. Adicionalmente se afirma que el mayor aporte lo harían las empresas.

76. Estos incentivos extremos han generado un debate dentro de la tecnocracia neoliberal. Mientras que algunos los aplauden, otros manifiestan su preocupación por los efectos fiscales, no sólo en condiciones de recesión, sino en el largo plazo. Igualmente advierten sobre la generación implícita de formas de competencia desleal, dado que la normatividad posibilita que la producción dentro de las zonas francas uniempresariales se pueda destinar también al mercado interno, lo cual generaría ventajas frente a los empresarios que no están dentro de ellas.

Considerando esa situación, en un alarde de equidad neoliberal, el director de Fedesarrollo propuso convertir a todo el país en una zona franca, con miras a que todos los capitalistas tuviesen las mismas ventajas. Otros, que ahora se oponen a estos incentivos, los consideran un regalo del gobierno y señalan que antes que de incentivos, la acumulación de capital depende mucho más del ciclo económico, de las expectativas de largo plazo y de otras variables fundamentales. Véase, Armando Montenegro, “Exenciones en recesión”, *El Espectador*, Bogotá, 17 de abril de 2009.

exenciones aún existentes a productos de la canasta familiar, así como de un aumento de su tasa, que actualmente se encuentra en el 16 por ciento (algunas propuestas de tecnócratas han sugerido que tal aumento sea de dos puntos porcentuales). El argumento que se presenta en este caso es que la tasa del IVA en Colombia sería de las más bajas de América Latina.

A lo anterior se adicionan las pretensiones de culminar los procesos de privatización, dentro de lo cual se ha propuesto (por parte de Alberto Carrasquilla) la enajenación de la propiedad estatal en la sociedad accionaria de Ecopetrol, así como de otros activos del Estado incluidos dentro del plan de privatizaciones del gobierno actual.

En igual sentido deben contemplarse las pretensiones de nuevas jurisdicciones del proceso de neoliberalización con la firma de tratados de libre comercio y a través de reformas en aquellos en los que no han prosperado plenamente políticas desreguladoras.

Crisis capitalista y régimen político

El hecho de que se asista a pretensiones de un uso capitalista de la crisis para impulsar un nuevo ciclo de reformas neoliberales como parte de la salida de ella, no significa –en términos políticos– que no se puedan considerar otras posibilidades. La crisis económica abre la posibilidad de un cambio de tendencia en las configuraciones autoritarias, criminales y mafiosas del régimen político en Colombia. Dichas configuraciones alcanzan entre tanto varias décadas de existencia y se han entronizado estructuralmente en el país. Durante los gobiernos de Uribe Vélez han tenido un importante despliegue⁷⁷. Su institucionalización –con la supuesta desmovilización y reincursión a la vida civil de grupos paramilitares y narcotraficantes– ha sido presentada a la opinión pública nacional e internacional (con relativo éxito) como uno de los grandes haberes de la política de *seguridad democrática*. En realidad, el proyecto que sectores de la derecha colombiana asume está encauzando el país por el camino de la dictadura civil, con la fachada de la democracia plebiscitaria. La tendencia a la *fujimorización* es evidente. A semejante proyecto se le viene caracterizando por sus inspiradores con el eufemismo de *Estado de opinión*, fase dizque superior del Estado de derecho⁷⁸.

77. Véase, Jairo Estrada Álvarez, “Capitalismo criminal: Tendencias de acumulación y estructuración del régimen político”, en Jairo Estrada Álvarez (coordinador). *Capitalismo criminal. Ensayos críticos*. Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Ciencia Política, Bogotá, 2008.

78. Sobre las configuraciones autoritarias más recientes del Estado en Colombia,

Uno de los fundamentos de la retórica gubernamental ha consistido en la elaboración y formulación del círculo virtuoso *seguridad-crecimiento económico*. El reciente crecimiento económico colombiano (2002-2007) se hizo aparecer como el resultado de las políticas de *seguridad democrática* que, en materia económica, se han acompañado de una profundización de las políticas neoliberales. No es casual que el gobierno de Uribe se haya erigido en referente para la derecha latinoamericana en momentos en los que los proyectos neoliberales entraban en crisis en otros países y abrían el paso a los gobiernos progresistas o alternativos⁷⁹. Si la lógica de la retórica de la *seguridad democrática* se mantuviera, la economía colombiana no tendría por qué encontrarse en crisis. La crisis capitalista ha lanzado por la borda, no obstante, la tesis de la mayor inversión y del crecimiento económico como producto de una fórmula que ha combinado agresivos incentivos al capital con autoritarismo. Esa tesis ya no se puede sostener. La crisis no lo permite.

Por ello, los esfuerzos gubernamentales actuales se orientan a mostrar que la crisis obedece a una coyuntura externa para así salvar al actual gobierno de cualquier responsabilidad y, más bien, sacar de ella dividendos políticos. Quienes han sido corresponsables de la actual situación pretenden parecer ahora muy preocupados por sus eventuales impactos y, además, tomando las medidas *políticamente correctas* para superarlos.

No obstante, existe suficiente evidencia para afirmar que la crisis es también una crisis de las políticas neoliberales. El neoliberalismo reciente en Colombia logró esconderse tras las políticas de *seguridad democrática* y los debates políticos que ellas generaron. En la trasescena de los debates nacionales sobre las configuraciones autoritarias, criminales y mafiosas del régimen político, se impusieron importantes reformas económicas propias del proceso de neoliberalización colombiano tendientes a consolidar una nueva geografía de la acumulación capitalista en el país. La *seguridad democrática* ha sido también un proyecto de ampliación y profundización del proceso de mercantilización de la sociedad y de la restauración y afianzamiento del poder de clase (dominante).

La crisis genera condiciones que pueden contribuir al resquebrajamiento no sólo del régimen autoritario de Uribe y de las políticas neoliberales

véase el trabajo de Oscar Mejía Quintana y Leopoldo Múnica Ruiz: "Constitución, democracia y Estado autoritario en Colombia", *Ciencia Política*, n° 6, Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Ciencia Política, Bogotá, julio – diciembre, 2009.

79. Véase, Beatriz Stolowicz (coordinadora), *Gobiernos de izquierda en América Latina. Un balance político*, Ediciones Aurora, Bogotá, D.C., 2007.

en Colombia. Considerando que la salida de la crisis es esencialmente política, la crisis abre objetivamente la posibilidad de una salida democrática, política y económica (una salida de continuidad no es descartable, en todo caso). Ello depende en buena medida de la movilización social y popular, de la capacidad y potencia que pueda desplegar la acción política organizada de los trabajadores y del rol que en ese sentido puedan desempeñar las fuerzas políticas opositoras en sus diversas expresiones.

En el pasado reciente se han presentado importantes movilizaciones sociales y populares, focalizadas, en todo caso. Ello ha sido de gran trascendencia en un país en el que las luchas sociales son estigmatizadas reiteradamente, criminalizadas y presentadas como parte de las *acciones del terrorismo*, pero resulta insuficiente para consolidar una alternativa democrática y popular a la crisis. La Colombia actual no se caracteriza (aún) por una gran movilización social y por un nivel generalizado de protesta que posibilite asestar una derrota al proyecto político económico de la derecha.

Las fuerzas democráticas y de izquierda, agrupadas en el Polo Democrático Alternativo –PDA–, han distraído buena parte de sus esfuerzos en desgastantes debates internos, antes que en la organización del pueblo y en la construcción de un proyecto para enfrentar la crisis y consolidar la posibilidad de una salida democrática⁸⁰. La derecha del PDA (o la *centroizquierda*), pese a ser minoritaria, ha logrado –con el apoyo de los medios masivos de comunicación del establecimiento– desviar la atención de los problemas fundamentales de la actual coyuntura (por ejemplo, la crisis capitalista y sus salidas) con la pretensión de desarrollar (con pocas posibilidades de éxito, por cierto) una política de alianzas meramente electoral. Por ello, su retórica se ha reducido a la búsqueda de *un gran acuerdo nacional* (incluyendo sectores del *uribismo*) con miras a las elecciones presidenciales de 2010. Se trata, sin duda, de un enfoque parroquial en momentos en los que mundialmente se debate la crisis. Los demás sectores, incluida la izquierda del Polo, no han logrado sustraerse de ese sentido del debate y no han podido posicionar su propia agenda, que es, a todas luces, más consecuente con el momento, las posibilidades y las mismas expectativas de la población colombiana⁸¹.

Las posibilidades inmediatas del Polo dependen en buena medida de

80. Sobre las diferencias programáticas dentro del PDA véase, Jairo Estrada Álvarez, “Proyectos de izquierda y gobiernos alternativos. Un análisis de la experiencia colombiana reciente”, en Stolowicz, Beatriz (coordinadora), *Gobiernos de izquierda en América Latina...*, ob. cit.

81. Véase, por ejemplo, “Conclusiones y relatorías del segundo congreso nacional del Polo Democrático Alternativo”, celebrado del 25 al 28 de febrero de 2009.

la superación definitiva de esos debates y del desarrollo de una agenda política que responda a las expectativas de cambio político y social de importantes sectores de la población. La confrontación al referendo reeleccionista y las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2010 serán un importante indicador en ese sentido.

Entre tanto, las fuerzas uribistas, que recogen las más variadas expresiones de la derecha colombiana, a agrupaciones políticas y a políticos comprometidos con el paramilitarismo, el clientelismo y la corrupción, insisten –con crecientes tropiezos y opciones estrechas– en su pretensión de imponer un tercer mandato presidencial de Álvaro Uribe. La crisis capitalista no es motivo de discurso político alguno por parte de estas fuerzas, que se rigen exclusivamente por los designios de su caudillo y de su séquito más cercano de colaboradores. El proyecto político del uribismo, además de su componente autoritario, se sustenta en la distribución clientelista del empleo y del presupuesto públicos y en el programa asistencialista de *Familias en acción*, de subsidios condicionados, con el que se ha logrado construir una base social dentro de los sectores más pobres de la sociedad (su cobertura esperada en 2010 es de 2.6 millones de familias).

A diferencia de 2006, cuando vino la reelección de Uribe, en esta ocasión no hay consenso en el bloque de poder en torno a su nombre. Diversos sectores de la derecha no uribista, del Partido Liberal, de la Iglesia y de los intelectuales orgánicos del neoliberalismo ven con relativa preocupación un tercer mandato de Uribe por los peligros que éste pueda representar para la consolidación de un proyecto hegemónico de larga duración, dados la creciente concentración del poder presidencial y el autoritarismo en aumento. La idea de un proyecto político de derecha moderna que respete las reglas de juego de la democracia liberal se fue desvaneciendo para dar paso a la lógica del régimen autoritario que encarna Uribe. Solamente en el campo de las políticas económicas de alcance estructural y, con matices, en la política macroeconómica se mantienen algunas identidades.

Del desenvolvimiento de la crisis en el futuro inmediato, de la forma como ésta impacte socialmente, de la dinámica que adquieran las luchas sociales y políticas, y del mismo papel de las fuerzas democráticas y de izquierda, dependerá en gran medida –como ya se dijo– la posibilidad de considerar una salida democrática.

La única forma de considerar una salida no neoliberal (incluida una opción democrático-popular) a la crisis resultaría de un cambio político que derrotase el proyecto político económico autoritario de la derecha en

Colombia. Esa opción tiene posibilidades, pero todavía muchas dificultades para perfilarse y consolidarse. Al menos, eso es lo que indica el estado actual del movimiento. Por otra parte, una salida anticapitalista no alcanza aún a situarse en la agenda, si se considera la tendencia internacional y la situación misma de las fuerzas populares y de izquierda. Una salida democrática pondría a Colombia en sintonía con la tendencia latinoamericana de gobiernos progresistas; generaría al mismo tiempo otro tipo de debates que hacen parte de la discusión en esos países, los cuales se mueven entre un nuevo consenso productivista posneoliberal y la opción revolucionaria hacia el socialismo. Sectores de la tecnocracia vienen tratando de copar el espacio de una salida no neoliberal; no es casual la toma de distancia frente a la actual política económica del gobierno de Uribe.

Crisis capitalista y financiación de la guerra contrainsurgente

La crisis capitalista incide sobre la estrategia guerrerrista que busca una solución militar del conflicto social y armado. Más de allá de las consideraciones políticas acerca del estado actual de la guerra en Colombia, que oscilan entre las tesis del *fin del fin*, sostenidas por las Fuerzas militares y los intelectuales de la derecha, y la imposibilidad de una salida militar, cuya consecuencia es el acuerdo humanitario y la salida política negociada, lo cierto es que la discusión sobre la sostenibilidad económica de la guerra contrainsurgente en el largo plazo⁸² ha adquirido mayor importancia. En particular se trata de la financiación de un gasto militar en ascenso que se ha expandido, como proporción del PIB, de 1.9 en 1990 a más del 5 por ciento en la actualidad, sin considerar los recursos provenientes del Plan Colombia.

La estrategia de guerra ha impuesto modificaciones en la estructura del gasto público en la medida en que ella ha incorporado nuevos gastos permanentes (por ejemplo, los que resultan de la innovación tecnológica y de la ampliación del pie de fuerza militar). Tales gastos han demandado un mayor nivel de ingresos del Estado, el cual ha proveniendo –a lo largo de esta década– de los mayores recaudos originados en las reformas tributarias, del control a la evasión y de la fase expansiva del ciclo (2002-2007), al igual que de ingresos transitorios, originados en imposiciones transitorias como el impuesto al patrimonio (el llamado *impuesto de guerra*), concebido para

82. En declaraciones del *Comisionado de paz*, Frank Pearl, el horizonte gubernamental de la duración de la guerra se amplió formalmente de los dieciocho meses anunciados al inicio del primer mandato del presidente Uribe a un lapso de quince a veinte años.

el período 2007-2010 y que hasta el momento ha generado recaudos de 8.6 billones de pesos. La crisis capitalista incide sobre las condiciones de financiación de la guerra en Colombia dados los impactos fiscales que ella genera. En presencia de menores recaudos por la caída de la actividad económica y de una probable redefinición (en todo caso, formal) del Plan Colombia, la única manera de mantener la estructura del gasto militar actual es recurriendo al endeudamiento o a nuevas imposiciones.

No es casual que el magnate Sarmiento Angulo –anticipándose a lo que serían los lineamientos de una reforma tributaria en 2010 que refleje los intereses del gran capital–, mostrara su desacuerdo con que los ricos sigan financiando con contribuciones específicas parte del gasto militar y haya propuesto un *impuesto general* para la financiación de la *seguridad democrática*. Tal propuesta fue acogida por el presidente Uribe, quien afirmó que “los sectores más pudientes de la sociedad han contribuido con recursos. ¿Qué viene? Habrá que pensar (...) Cómo vamos a tener una renta permanente para seguir financiando la seguridad y derrotando las raíces del terrorismo”. Por lo pronto, razones de conveniencia política han llevado al gobierno a proponer un nuevo impuesto transitorio a partir de 2011, que mantiene el diseño original del impuesto al patrimonio y contiene como novedad la ampliación de la base gravable a patrimonios superiores a 2.000 millones de pesos (el vigente contempla patrimonios de más de 3.000 millones de pesos).

De no prosperar una salida democrática a la crisis y una solución política negociada, la crisis capitalista será usada para justificar, en el marco de una reforma tributaria estructural, nuevas fuentes de financiación de la guerra que involucren a toda la población, que es lo que se ve venir.

Por otra parte, el creciente gasto militar continuará en la agenda política de la derecha colombiana que pretende institucionalizar –de manera permanente– su política de *seguridad democrática*. La perspectiva futura sugiere, además, un probable escalamiento de la guerra, que se acompaña de una preocupante tendencia a su regionalización, alimentada ahora con la mayor presencia militar de Estados Unidos en Colombia, lo que convertirá al territorio nacional en una especie de portaviones desde el cual se podrán adelantar operaciones ofensivas por tierra, mar y aire.

La celeridad con que se buscan recursos para la financiación de la guerra y la decisión política hacia su escalonamiento contrasta con la postura gubernamental en el tratamiento de la población desplazada forzosamente⁸³

83. La cifras de desplazamiento forzado varían ampliamente: según Acción Social (institución

y, en general, de las víctimas de la guerra. Ni siquiera los reiterados requerimientos de la Corte Constitucional para emprender medidas de política pública tendientes a superar de manera definitiva el *estado de cosas inconstitucional*⁸⁴ han merecido la atención debida del gobierno. Más recientemente, el gobierno presionó a su bancada para que archivara el proyecto de ley de víctimas, con el que se buscaba avanzar en un concepto de reparación, aduciendo problemas fiscales. En la fórmula, “más gasto militar, límites al financiamiento de las víctimas de la guerra”, se sintetiza –en forma sencilla– la naturaleza militarista y antipopular del gobierno de Uribe.

Consideraciones finales: Crisis capitalista y producción de subjetividades

Más allá de los aspectos políticos o económicos, la crisis capitalista modifica las condiciones de la producción de subjetividades. La crisis capitalista ha abierto una nueva oportunidad histórica para la crítica al capitalismo, pues ella ha puesto en evidencia –de manera descarnada y violenta– los límites del capitalismo como organización económica y social y como proyecto para la vida humana. En ese sentido, ella abre objetivamente nuevas posibilidades para el despliegue de subjetividades anticapitalistas y para la acción colectiva organizada de los trabajadores.

La crisis asesta un rudo golpe a la ideología neoliberal, particularmente a los discursos sobre el *fin de la historia*, a aquella fórmula mágica que –se decía– haría eterno el capitalismo: libre mercado más democracia liberal. El golpe al proyecto político económico neoliberal no representa el fin del neoliberalismo, si éste se entiende como una fase capitalista de ofensiva estructural del capital contra el mundo del trabajo con el propósito de redistribuir en forma regresiva la riqueza socialmente producida a favor de los fondos de acumulación y en detrimento de los fondos de consumo.

Las interpretaciones de la crisis que la reducen exclusivamente a una crisis del neoliberalismo como técnica de regulación, se enmarcan dentro

de gobierno) hay 2'872.395 desplazados; Codhes registra 4'628.862; el Consejo Noruego para Refugiados afirma que el número oscila entre 2'650.000 y 4'360.000, y, de acuerdo con Acnur, la cifra está en cerca de tres millones. Se trata de las tragedias de desplazamiento más grandes del mundo, sólo superada por Sudán y seguida de cerca por Irak. Del total de esta población, el 98 por ciento vive en la pobreza y el 82 por ciento en la indigencia. César Rodríguez Garavito y Diana Rodríguez Franco, “Atención a desplazados: Corte Constitucional evaluó al Gobierno y el balance aún es negativo”, *Semana*, Bogotá, 12 de julio de 2009.

84. Véase, T-025 de 2004 y sucesivos autos posteriores.

de los intentos de dar una salida capitalista de la crisis. Por eso se habla justamente de un regreso del *intervencionismo de Estado*. Con ello se quiere hacer énfasis en que los problemas del capitalismo serían esencialmente del modo de regulación. Aunque también lo son, lo que ha salido a flote son precisamente las dimensiones estructurales, sistémicas, de la crisis. Siempre será conveniente recordar que la separación Estado-mercado es más bien una construcción discursiva e ideológica. Si en algún proyecto político económico se ha puesto en evidencia el carácter de la dominación de clase a través del Estado, ese ha sido precisamente el proyecto neoliberal. Tal proyecto ha mostrado cómo la clase dominante instrumentaliza el Estado para imponer sus intereses⁸⁵.

La crisis capitalista permite poner los acentos en donde son: en el cuestionamiento de las relaciones de producción que la originan y del orden político y social dispuesto para su protección. En ese sentido, la crisis le da un nuevo sentido (y nuevos contenidos) a los discursos y proyectos políticos que se han trazado como propósito la superación de capitalismo; alienta el andar de aquellos gobiernos de América Latina que exploran nuevas formas de organización social y estimula toda lucha contra el autoritarismo, la dominación y la explotación.

Bibliografía

- Banco de la República (2009). *Informe de la Junta Directiva al Congreso*, Bogotá, marzo.
- (2009). Informe de la Junta Directiva al Congreso, Bogotá, julio.
- Bello, Walden (2008). “Todo lo que usted quiere saber sobre el origen de esta crisis pero teme no entenderlo”, *Sin Permiso*, Madrid, 05.10.
- (2009). Keynes. ¿Un hombre actual?, *Sin permiso*, Madrid, 19.07.
- Brenner, Robert (2009). “Un análisis histórico-económico clásico de la actual crisis”, *Sin Permiso*, Madrid, 22.02.
- Caballero Argáez, C., (2009). “Por fin despertó el gobierno”, *El Tiempo*, Bogotá. 28 de marzo de 2009.
- Carrasquilla, Alberto (2009). “Una fábula y seis moralejas”, *El Espectador*, Bogotá, 27 de junio.
- Conclusiones y relatorías del segundo congreso nacional del Polo Democrático Alternativo, celebrado del 25 al 28 de febrero de 2009.
- Corte Constitucional, T-024 de 2004.

85. David Harvey, *Breve historia del neoliberalismo*, Ediciones Akal, Madrid, 2007.

- Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE (2009). *Muestra mensual manufacturera*, Bogotá, junio.
- (2009). *Muestra mensual de comercio al por menor*, Bogotá, junio.
- Departamento Nacional de Planeación (2009). “Inversión extranjera directa: Factor de desarrollo de la infraestructura colombiana”, Bogotá, 6 de febrero.
- Estrada Álvarez, Jairo (2007). “Proyectos de izquierda y gobiernos alternativos. Un análisis de la experiencia colombiana reciente”, en Beatriz Stolowicz (coordinadora), *Gobiernos de izquierda en América Latina. Un balance político*, Ediciones Aurora, Bogotá.
- (2008). “Capitalismo criminal: Tendencias de acumulación y estructuración del régimen político”, en Estrada Álvarez, Jairo (coordinador), *Capitalismo criminal. Ensayos críticos*, Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Ciencia Política, Bogotá.
- (2008). “Transnacionalización y nueva espacialidad capitalista. Elementos de economía política de la inversión extranjera en Colombia”, *Revista Espacio crítico*, n° 8.
- Fedesarrollo (2009). “El anteproyecto del presupuesto: ¿A dónde fue el plan anticíclico?”, *Economía y política. Análisis de la coyuntura legislativa*, n° 51, Bogotá, mayo.
- (2009). “El sistema pensional y el mercado laboral: dos manifestaciones de un mismo problema”, *Tendencia económica*, n° 85, Bogotá, mayo.
- Gambina, Julio (2009). *Crisis capitalista y políticas anticrisis: El debate regional*, Buenos Aires, mayo de 2009 (mimeo).
- Harvey, David (2007). *Breve historia del neoliberalismo*, Ediciones Akal, Madrid.
- (2009). “¿Estamos realmente ante el fin del neoliberalismo? La crisis y la consolidación del poder de las clases dominantes”, *Sin Permiso*, Madrid, 22.03.2009.
- Hombres, Rudolf (2009). “La política boyante y la economía al garete”, *El Tiempo*, 27 de marzo.
- Kalmanovitz, Salomón (2009). “Una política fiscal recesiva”, *El Espectador*, Bogotá, 22 de marzo.
- (2009). “De tributos justos”, *El Espectador*, Bogotá, 19 de julio.
- (2009). “El presupuesto de 2010”, *El Espectador*, Bogotá, 2 de agosto.
- Katz, Claudio (2009). *América Latina frente a la crisis global*, Buenos Aires, febrero de 2009 (mimeo).
- Libreros, Daniel y Sarmiento, Libardo (2009). *La crisis estructural del sistema mundo capitalista y su impacto en Colombia*, Bogotá, mayo.
- Lozano, Ignacio (2009). “Caracterización de la política fiscal en Colombia y

- análisis de su postura frente a la crisis internacional”, *Borradores de economía*, n° 566, Banco de la República, Bogotá, mayo.
- Mejía Quintana, Oscar y Múnera Ruiz, Leopoldo (2008). “Constitución, democracia y Estado autoritario en Colombia”, *Ciencia Política*, n° 6, Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Ciencia Política, Bogotá, julio-diciembre.
- Montenegro, Armando (2009). “Exenciones en recesión”, *El Espectador*, 17 de abril.
(2009). “Recesión y gasto público”, *El Espectador*, 25 de abril.
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2009). “Impactos y oportunidades de la crisis”, Bogotá, D.C., febrero 4.
(2009). *Marco fiscal de mediano plazo 2009*, Bogotá, D.C.
- Negri, Antonio (1997). “John Maynard Keynes y la teoría del Estado en el 29”, *Revista Hojas Económicas*, n°s 6 y 7, Universidad Central, Bogotá.
- Rodríguez Garavito, César y Rodríguez Franco, Diana (2009). “Atención a desplazados: Corte Constitucional evaluó al Gobierno y el balance aún es negativo”, *Semana*, Bogotá, 12 de julio.
- Sarmiento, Libardo (2009). “Crisis del sistema monetaria mundial y concentración financiera en Colombia”, en Suplemento *Desde Abajo*, Bogotá, enero-febrero.
- Steiner R. (2005). “Sustituir el actual salario mínimo por uno ‘flexible’”, Entrevista en *Portafolio*, Bogotá, 5 de abril de 2009.
- Stolowicz, Beatriz (coordinadora) (2007). *Gobiernos de izquierda en América Latina. Un balance político*, Ediciones Aurora, Bogotá, D.C.
(2006). “El posliberalismo y la izquierda en América Latina” en Estrada Álvarez, Jairo (compilador). *Teoría y acción política en el capitalismo actual*, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Departamento de Ciencia Política, Bogotá, D.C.
- Suárez Montoya, Aurelio (2009). “Desempleo, deflación de alimentos, revaluación e inflación de valores bursátiles”, Bogotá, 10 de agosto (mimeo).